

LEGAJO DE APELACIÓN EN CAUSA N° CPE 554/2015, CARATULADA: “B., A.; J., H.V.; J., M.A.; T.YC. S.A. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”. J.N.P.E. N° 10. SECRETARÍA N° 20. EXPEDIENTE N° CPE 554/2015/9/CA5. ORDEN N° 30.760. SALA “B”.

Buenos Aires, de agosto de 2023.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la querella (A.F.I.P.-D.G.I.) contra los puntos dispositivos I, II, III y IV de la resolución de fecha 17/11/2021.

Los memoriales por los cuales las defensas de L.M.E., de T.YC. S.A., de H.V.J., de A.B., de M.A.J., el señor Fiscal General de Cámara y el representante de la querella (A.F.I.P.-D.G.I.), informaron por escrito en sustitución de la audiencia señalada en los términos del artículo 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que la causa principal a la cual corresponde este incidente, se inició como consecuencia de la denuncia presentada el 28 de mayo de 2015 ante la Oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico por el Subdirector General de Coordinación Técnico Institucional y el subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I., para la cual resultó sorteado para intervenir el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 -actualmente Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10- (confr. fs. 15 de los autos principales).

Por la presentación mencionada, los funcionarios del organismo recaudador expresaron: “...venimos a denunciar hechos encuadrables en los tipos penales de *EVASIÓN TRIBUTARIA* y *ASOCIACION ILICITA FISCAL*, en concurrencia con *ENCUBRIMIENTO DE ACTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES ILICITAS* (*‘LAVADO DE DINERO’*), solicitando la apertura del sumario, la producción de medidas de prueba que confirmen los hechos que se narrarán.

En efecto, los hechos planteados versan sobre la existencia de negocios económicos ocultos que no tributaron impuestos en nuestro país -evasión tributaria- cometida por un grupo organizado de ‘hombres de negocios de futbol’ -asociación ilícita fiscal-, y el encubrimiento de su origen al momento de exteriorizarse en las distintas jurisdicciones.

En particular, la EVASION TRIBUTARIA y ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL, en concurrencia con ENCUBRIMIENTO DE ACTIVOS fue



cometido por A.B., H.V.J., M.A.J., T.YC. S.A. F.P. S.A., F.P.I.T. S.A. y TYC S SA., en nombre propio y mediante la utilización de sociedades off-shore en Panamá y Uruguay que sirvieron y facilitaron la maniobra...

El pasado martes -26/5/2015- los medios internacionales reflejaban al unísono una primicia estridente: la justicia de los Estados Unidos de América solicitaba la detención de hombres vinculados al fútbol, imputándoles graves delitos tales como conspiración, lavado de dinero y evasión. Se mostraban escandalizadoras imágenes de personalidades conocidas en el ambiente futbolístico saliendo arrestados, esposados y trasladados desde hoteles de la Confederación Suiza.

La crónica, que resulta a esta altura de público y notorio, puede resumirse de la siguiente forma:

Una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos involucra al ex presidente de la AFA, J.G. en el cobro de coimas por, al menos 15 millones de dólares.

El apartado 249 del proceso judicial abierto en Nueva York establece que D., una empresa conformada por T., de Brasil; TyF.P., de Argentina, cada uno con el 33% de las acciones- ‘acordó pagar US\$ 100 millones de coimas a los ejecutivos de C., quienes, además, eran miembros de la FIFA’.

T. se encargaría de las transmisiones de TV; T., de la comercialización, y F.P., de la organización.

La investigación judicial llevada adelante en EEUU especifica: ‘A cambio de la firma del contrato, los dirigentes se repartieron US\$ 20 millones, y una cantidad similar por cada una de las cuatro C. A. siguientes: 2015, 2016 -llamada C. del C.-, 2019 y 2023’.

‘Cada pago de 20 millones fue dividido en sobornos de la siguiente forma: tres millones para cada uno de los máximos dirigentes de la C.: el presidente de la Confederación y los presidentes de las Federaciones de Brasil y Argentina, y 1,5 millones de dólares a cada uno de los otro siete presidentes de las federaciones de la C.’.

T. pertenece a A.B. mientras que F.P. a H. y M.J..

La acusación es por ‘organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero’, según la investigación judicial llevada adelante en los Estados Unidos...

De lo precedente se desprende con meridiana claridad que nos encontramos ante la ejecución de determinados actos por un conjunto de sujetos que actuaban en forma coordinada y estable. Es la averiguación de esos actos y sus consecuencias lo que amerita la instrucción sumarial tendiente a determinar el correlato local de las imputaciones efectuadas por la autoridad extranjera. Forzoso es reconocer que parte de los hechos



imputados, los actores involucrados, y las consecuencias jurídicas, constituyen materia de investigación desde la óptica criminal, en particular la criminalidad económica.

En efecto, los hechos que formarían parte de la investigación llevada adelante por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se vinculan con operaciones entre particulares de contenido patrimonial. Y justamente formaría parte de la imputación la ocultación y sustracción de la tributación respectiva como consecuencia de los mismos.

Evidentemente, existe un paralelismo con las consecuencias que la confirmación de esos hechos en jurisdicción local pudieran acarrear: esto es que ante la existencia de negocios sujetos a imposición y su ocultación o simulación se activa la persecución penal prevista por el Título I de la Ley 24.769. Si a ello le sumamos que los hechos generadores habrían sido concretados por una estructura estable de personas, mancomunadas y conformada para ello, el tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL sería atribuible a sus integrantes en las calidades que les competa. Todo ello sin dejar de lado a la potencial EVASION TRIBUTARIA como delito precedente del delito -valga la redundancia- de LAVADO DE ACTIVOS. Maniobras todas estas que, forzoso resulta concluir, a la luz de los hechos expuestos merecen ser investigados en el marco de una instrucción sumarial penal...

...nos encontramos en la inteligencia que los hechos investigados en Estados Unidos de América tienen un correlato inexpugnable en la comisión de los delitos de evasión fiscal -Título I de la Ley 24.769-, asociación ilícita fiscal -artículo 15 c) de la Ley 24.769-, y encubrimiento de activos provenientes de actividades ilícitas -Título XIII del Código Penal-.

Ello en tanto, la articulación de negocios por parte de un grupo concertado de personas, formado para la ejecución de negocios de comercialización, intermediación y/o cualquier otra figura que recoja el derecho privado; ocultándolos a Fisco al momento de liquidar los impuestos respectivos; y su traslación entre jurisdicciones valiéndose del ocultamiento de los reales operadores económicos y ocultando esas defraudaciones precedentes, nos conducen a esta conclusión, merecedora de la investigación propuesta..." (confr. fs. 1/14 de los autos principales).

2º) Que, una vez ratificada la denuncia por los presentantes, con fecha 29/05/2015, el señor juez que se encontraba a cargo del juzgado de la instancia anterior confirió la vista que se prevé por el art. 180 del C.P.P.N. al Ministerio Público Fiscal (confr. fs. 18/24 de los autos principales), cuyo representante, después de practicar algunas medidas de prueba mediante la

formación de actuaciones preliminares, por el dictamen de fecha 14/07/2015, formuló el requerimiento de instrucción en los términos del art. 188 del C.P.P.N. con relación a algunos de los hechos denunciados.

Por aquel dictamen, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9, manifestó: “...Llegado el momento de expedirme respecto de la vista conferida, entiendo que, del análisis de todo lo expuesto en los apartados precedentes, los hechos que se vienen a poner en conocimiento tienen que ver con que las personas físicas y jurídicas que habrían participado en la entrega de las sumas consideradas ‘sobornos’ o ‘coimas’ en el marco del proceso judicial abierto en Estados Unidos, que de acuerdo con la acusación fiscal alcanzarían de momento la suma de u\$s 40 millones, no evidencian -de acuerdo con la información recabada por la AFIP- una realidad económica, patrimonial y consecuentemente impositiva, acorde con los volúmenes de dinero entregados bajo aquellos conceptos.

En función de ello, y si bien no se encuentran determinados los perjuicios fiscales respectivos, la magnitud de los montos que podría encontrarse involucrada y que habría repercutido, en cada caso, en la determinación del Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado y sobre los Bienes Personales, ponen en evidencia la relevancia penal que podrían traer aparejados.

Estimo que idéntico razonamiento puede hacerse extensivo respecto del compromiso de pago asumido por la suma de u\$s 352,5 millones exteriorizada en los contratos celebrados, o cuanto menos, a la suma de u\$s 25 millones, pagada por D. S.A. a la C. en concepto de adelanto por el contrato que le otorgara los derechos comerciales de la C.A. 2015. Es decir, que de acuerdo con la información que sus integrantes declararan oportunamente al organismo recaudador, sus patrimonios no permitirían hacer frente a un desembolso de dinero de semejante cuantía.

Asimismo, la información recabada hasta el momento, en particular aquella relacionada con la existencia de procesos de fiscalización en trámite por los años 2012, 2013 y 2014 ... imponen la necesidad de abrir la investigación a los efectos de corroborar tales extremos, en virtud de lo cual habré de impulsar la acción penal de conformidad con lo establecido por el art. 188 del CPPN.

De esta forma, será menester proceder en autos, a la cuantificación de los montos presuntamente evadidos, requiriendo a la Administración Federal de Ingresos Públicos, que proceda en los términos del tercer párrafo del art.18 de la ley 24.769...” (confr. fs. 25/31 vta. de los autos principales).



3º) Que, por la resolución de fecha 5/05/2016, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, dispuso: “...I. *DESESTIMAR PARCIALMENTE las presentes actuaciones en orden a la denuncia de ‘asociación ilícita fiscal’ y a la ‘supuesta evasión fiscal respecto de los períodos no prescriptos penalmente’ (en este último caso, claro está, con excepción de aquellos hechos respecto de los cuales se expidió expresamente el señor Fiscal) -confr. art. 180, tercer párrafo, del C.P.P.N. en función de las consideraciones 3º a 7º y 8º a 12º de la presente-*.”

II.- *DESESTIMAR PARCIALMENTE las presentes actuaciones en lo que se refiere a la denuncia del delito de ‘lavado de activos’ que toma como delito precedente a las presuntas evasiones tributarias investigadas en autos, estar al respecto a las resultas de la pesquisa que se lleva a cabo en las presentes actuaciones (confr. consideraciones 15º a 19º).*

III.- *RECHAZAR la solicitud de la A.F.I.P./ D.G.I. de ser tenida por parte querellante (confr. consideración 24º).*

IV.- *ESTAR, en orden a la denuncia de ‘lavado de activos’ que toma como delitos precedentes los hechos de ‘coimas’, ‘sobornos’, ‘pagos de sobreprecios’, referidos por la consideración 13º, a los procesos que ya se encuentran en trámite ante las autoridades judiciales estadounidenses (en el marco del xxxxxx, I. Xxxxx) y ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad (conf. fs. 410/415 y 983/vta.) -confr. consids. 20º a 22º- y, consecuentemente REMITIR testimonios de las partes pertinentes de estos autos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría [N° 6], en relación a los autos N° .../2015, del registro de aquel tribunal (confr. consid. 23º)...” (confr. fs. 1037/1045 de los autos principales).*

Por aquella misma resolución, el señor juez a cargo del juzgado “a quo” manifestó: “...sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, en atención a que actualmente la investigación se encuentra delegada en el Señor Fiscal (confr. art. 196 del C.P.P.N.), la opinión de este tribunal respecto de si corresponde o no la apertura de la instrucción en orden a hechos distintos de aquellos que fueron objeto del requerimiento de instrucción de fs. 25/31 vta. se relativiza, dado que aquel magistrado, en caso de considerar pertinente la ampliación del objeto del proceso en función de los elementos de juicio que colecte (sea por el delito de asociación ilícita fiscal, de lavado de activos, de otras evasiones tributarias distintas de aquellas que ya son objeto de investigación o de otro delito) se encuentra facultado para promover la respectiva acción penal de oficio (confr. art. 188, segundo párrafo; 196, segundo párrafo; 210, segundo párrafo y ccdtes. del C.P.P.N.)...” (confr. el considerando 25º de la resolución citada).

La resolución mencionada fue apelada por la representación de la A.F.I.P.-D.G.I., lo que motivó la formación del legajo de apelación N° CPE 554/2015/5/CA3, el cual se elevó a conocimiento de este Tribunal.

4º) Que, por el dictamen de fecha 1/09/2016, el señor representante del Ministerio Público Fiscal que tenía delegada la investigación, en los términos del art. 196 del C.P.P.N., dispuso: “...*Que, como resultado de la pesquisa que se viene desarrollando en estas actuaciones, tanto de la información recibida del exterior (actuaciones producidas por el Departamento de Gestión de Información Internacional de AFIP y el resultado del exhorto remitido a los EE.UU), como de las distintas tareas de verificación practicadas por los inspectores actuantes en el marco del informe de deuda solicitado en los términos del art. 18 de la Ley 24.769, se observan una cantidad de operaciones económicas que se desarrollan durante los años 2015 y 2016.*

Dicha actividad resulta de actos jurídicos con relevancia contable que fueron sucediendo desde el año 2012 (objeto de este sumario), y continúan generando actividad con relevancia fiscal hasta la fecha.

Por ello, un análisis abarcativo de las reales dimensiones de la actividad y su incidencia fiscal en los contribuyentes obligados aquí investigados, como de la posible comisión de delitos reprimidos por la Ley 24.769, requiere necesariamente la ampliación de la pesquisa a las obligaciones tributarias que hubieran vencido hasta, por lo menos, el evento programado en el mes de junio 2016 (Copa Centenario), sin perjuicio de lo que en definitiva resulte de las pruebas a producirse en el marco del expediente, lo que así se resuelve...”.

5º) Que, por el pronunciamiento de fecha 29/11/2016, en el marco del legajo de apelación N° CPE 554/2015/5/CA3, formado como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representación de la A.F.I.P.-D.G.I. contra la resolución de fecha 5/05/2016, reseñada por el considerando 3º de la presente, esta Sala “B” resolvió: “...I. CONFIRMAR los puntos dispositivos I, II, y III de la resolución recurrida.

II. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

III. DECLARAR ERRONEAMENTE CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de la querella pretensa contra el punto dispositivo IV de la resolución de fs. 1037/1045 de los autos principales...” (confr. el pronunciamiento del CPE 544/2015/5/CA3, res. del 29/11/2016, Reg. Interno N° 728/16 de esta Sala “B”).



6º) Que, a fs. 461/546 vta. de los autos principales se agregó una copia en idioma inglés de la acusación de fecha 20/05/2015, formulada por los fiscales en el expediente N° xxxxxx, que tramitó ante el Tribunal de distrito de Estados Unidos Distrito Este de Nueva York, caratulado: “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA J.W., E.L., J.R., C.T., J.W., E.F., R.E., J.M.M., N.L., A.B., A.D., H. J., M.J. Y J.M.”, cuya traducción al idioma español se agregó a fs. 547/602 de los autos principales.

Por los párrafos numerados del 265 al 342, ambos inclusive, se describen los delitos penales imputados en aquel expediente. Se trata de 47 delitos, de los cuales resultan de interés para la presente los delitos identificados con los números 1, 39 y 40 por encontrarse imputados en los mismos los ciudadanos argentinos A.B., H.V.J. y M.A.J..

A continuación se transcriben los delitos imputados a los nombrados en aquel expediente: “...*DELITO UNO (conspiración mafiosa)...*
265. Desde 1991 y hasta el presente, ambas fechas son aproximadas pero se incluyen en el período al que se hace referencia, dentro del Distrito Este de Nueva York, los demandados J.W., E.L., J.R., C.T., J.W., E.F., R.E., J.M.M., N.L., A.B., A.D., H. J., M.J. Y J.M., también conocido como José Lazaro, junto con otros, quienes eran personas físicas empleadas por la empresa asociadas a ésta, que se dedicaba y cuyas actividades afectaban el comercio inter-estatal y en el extranjero, a sabiendas e intencionalmente, conspiraron para incumplir el Artículo 1962 (c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es decir para realizar y participar, de manera directa o indirecta, en los asuntos de dicha empresa a través de un patrón de actividades mafiosas, según se define en los Artículos 1961 (1) y 1961 (5) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

266. El patrón de actividades mafiosas a través del cual los demandados J.W., E.L., J.R., C.T., J.W., E.F., R.E., J.M.M., N.L., A.B., A.D., H. J., M.J. y J.M., junto a otros, acordaron realizar y participar, de manera directa e indirecta, en los negocios de la empresa que consistían en múltiples actos imputables bajo:

- (a) Artículo 1343, Título 18 del Código de los Estados Unidos, (fraude electrónico, incluso fraude electrónico por servicios honestos);
- (b) Artículos 1956 y 1957, Título 18 del Código de los Estados Unidos, (lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero);
- (c) Artículo 1953, Título 18 del Código de los Estados Unidos, (viaje inter-estatal y al extranjero para propiciar la mafia);
- (d) Artículo 1512, Título 18 del Código de los Estados Unidos, (obstrucción de justicia); y

Múltiples actos que implican sobornos, en violación de los artículos 180.03 y 180.08 de la ley penal del estado de Nueva York. Cada demandado admitió

que un conspirador cometió al menos dos actos mafiosos en la realización de los negocios de la empresa, los últimos de los cuales tuvieron lugar dentro de los 10 años del acto mafioso anterior....

DELITO TREINTA Y NUEVE (Conspiración para fraude electrónico- Esquema del Centenario de la C.A. de C./CONCACAF).

333. Las alegaciones expresadas en los párrafos 1 a 263 se repiten e incorporan según lo que se establece en este párrafo.

334. Desde abril de 2010 y hasta el presente, ambas fechas son aproximadas pero se incluyen en el período al que se hace referencia, en el Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, los demandados J.W., E.F., R.E., J.M.M., N.L., A.B., A.D., H. J., M.J. y J.M., también conocido como José Lazaro, junto a otros, conspiraron a sabiendas e intencionalmente, para llevar a cabo un esquema para defraudar a FIFA, CONCACAF y C. así como a sus organizaciones miembro, incluso para privar a FIFA, CONCACAF y C. así como a sus organizaciones miembro de sus respectivos derechos a servicios honestos y leales a través de sobornos y para obtener dinero e inmuebles por medio de excusas, manifestaciones y promesas falsas y fraudulentas y para llevar a cabo dicho esquema y artificio, transmitir y hacer que se transmita por comunicación electrónica en comercio inter-estatal y en el extranjero, escritos, señas, señales, imágenes y sonidos, es decir: transferencias electrónicas en incumplimiento del artículo 1343 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

(Artículos 1349 y 3551 y ss. del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

DELITO CUARENTA (Conspiración para lavado de dinero- Esquema del Centenario de la C.A. de C. / CONCACAF).

335. Las alegaciones expresadas en los párrafos 1 a 263 se repiten e incorporan según lo que se establece en este párrafo.

336. Desde abril de 2010 y hasta el presente, ambas fechas son aproximadas pero se incluyen en el período al que se hace referencia, en el Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, los demandados J.W., E.F., R.E., J.M.M., N.L., A.B., A.D., H. J., M.J. Y J.M., también conocido como José Lazaro, junto con otros, conspiraron a sabiendas e intencionalmente, para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos, a saber: transferencias electrónicas, desde lugares en los Estados Unidos hacia y a través de lugares fuera de los Estados Unidos y a lugares en Estados Unidos desde y a través de lugares fuera de Estados Unidos, con la intención de promover y llevar a cabo una actividad ilícita específica, a saber: fraude electrónico, en incumplimiento del Artículo 1343 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, todo esto en contra del Artículo 1956 (a) (2) (A) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Fecha de firma: 16/08/2023

Alta en sistema: 17/08/2023

Firmado por: GUILLERMO RICARDO VILLELLA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA



#36037245#379615977#20230816120724898

(Artículos 1956 (h) y 3551 y ss. del Título 18 del Código de los Estados Unidos):... ” (confr. fs. 583 vta./598 de los autos principales).

7º) Que, con fecha 29/08/2015, el señor representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la dirección de la investigación, dispuso, entre otras medidas: “...oficiase a la AFIP, por intermedio de la Dirección de Planificación Penal, a fin de que, en el marco de lo establecido en el art. 18 de la ley 24.769, se sirvan realizar un informe de determinación de deuda de cada contribuyente investigado obligado a impuestos nacionales... debiendo elevar cada 15 días un informe parcial de situación, absteniéndose el personal actuante de practicar requerimientos a las contribuyentes T.YC. S.A....y F.P. I. T. S.A....y sus responsables, y las personas físicas A.B....V. J....y M.J....” (confr. fs. 126/126 vta. de los autos principales):

A fs. 2357/2436 de la causa principal, se agregó un informe confeccionado por el equipo de inspección conformado por la Inspectora E.O. y el supervisor W.B., de la Dirección Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I. relacionado con el trámite de la determinación de deuda en concepto de Impuesto a las Ganancias, en los términos del art. 18 de la ley 24.769, correspondiente al contribuyente T.YC. S.A.

Por aquel informe, los funcionarios del organismo recaudador expresaron: “... Esta fiscalización, a través de la Fiscalía que interviene en la causa, tomó conocimiento del acuerdo suscripto entre T.YC. S.A. y la Justicia de Estados Unidos, denominado D.P.A. (‘DPA’), que es referenciado en Nota 12 a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2015, bajo el título ‘Investigación del Departamento de los Estados Unidos y sus consecuencias’.

La nota describe como a partir de la causa ‘United States v. J.W.er al’ 15 Cr 252, se dio a conocer la imputación por parte del departamento de Justicia de Estados Unidos a catorce individuos vinculados a la FIFA; C.; CONCACAF y empresas vinculadas con el negocio del M.D., indicando que entre los acusados se encontraba quien hasta entonces se desempeñaba como Presidente del Directorio y Gerente General de la sociedad, el señor B., que el 16 de noviembre de 2015 se declara culpable de los cargos de asociación ilícita, conspiración para transferencias fraudulentas y conspiración para lavado de dinero en relación con la obtención de derechos de transmisión de ciertos eventos deportivos, y acordó el decomiso a favor del Departamento de Justicia por U\$S 21,6 millones propios.

En la Nota 12 continuación, luego de distintas descripciones de la investigación y sus consecuencias, T. hace referencia a otro acuerdo firmado por la propia empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los siguientes términos:



El 13 de diciembre de 2016 el DoJ y la sociedad suscribieron un acuerdo denominado D.P.A. ('DPA'). EL DPA termina la investigación de la causa FIFA Gate completamente respecto de la Sociedad. Teniendo en cuenta que con la firma de DPA la sociedad acepta la responsabilidad por la conducta criminal de ciertos funcionarios; directores, empleados y agentes al momento de los hechos investigados por el DoJ...

...la sociedad ha asumido en el DPA, a saber; i) consentir el decomiso por parte de Estados Unidos de USD 89.062.616 (equivalente a \$ 1.161.376.513 al 31 de diciembre de 2015) ii) pagar una sanción de USD 23.760.000 (equivalente a \$ 309.830.400 a la referida fecha)...

La empresa expone el resultado del decomiso y la sanción en el rubro Otros Ingresos y Egresos del Cuadro de Resultados del balance al 31 de diciembre de 2015, revirtiendo de esa forma el resultado de ganancia por \$ 865.206.821,79 a pérdida por \$ 480.345.501.

Cabe señalar que al presentar la DJ rectificativa del Impuesto a las Ganancias al 14/3/2017, la empresa ajusta la perdida por el decomiso y la sanción incluida en el resultado contable, considerándola no computable.

D.P.A. ('DPA'):

Del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, surge el propio reconocimiento por parte de T.YC. S.A., de distintos datos referidos a las operaciones realizadas a través de las empresas subsidiarias, T y C I. BV y P. de E. S.A. (participación 100%) y también de D. S.A. (participación 33%)...

El reconocimiento de T. en este punto, resulta coincidente con los términos del Balance de TyC I. BV, con referencia a las C. M., respecto de las siguientes expresiones:

En diciembre de 2006, la Sociedad adquirió los derechos para transmitir (vía T., radio, teléfonos celulares e internet) los partidos de la C.M. FIFA de los años 2010 y 2014, y de otros eventos organizados por la FIFA. Los derechos se compraron a un tercero por un valor 13.600.000 dólares fs 20.

Para ayudar en la adquisición de estos derechos, la Sociedad contrató a un consultor externo a quién debió abonarse 6.400.000 de dólares en concepto de honorarios una vez realizada la adquisición de estos derechos a fs.20.

En el año 2011, la Sociedad adquirió los derechos para transmitir los partidos de todos los T. de la FIFA entre los años 2015 y 2022. Los derechos se compraron a un tercero por un valor de 32.000.000 dólares fs. 20.

De forma semejante en otros puntos de su declaración, T. refieren a las C. América, explicando que empresas 'subsidiarias' cuyas obtuvieron los derechos de transmisión, se transcriben a continuación los principales puntos:



El punto 39 del DPA,

‘En mayo de 2013, P. de E. S.A., una subsidiaria de T., T. y de la Empresa A de M.D. formaron D., una nueva empresa en la que cada entidad tiene un tercio de interés. D. firmó un contrato de USA 317,5 millones con la C. para obtener los derechos mundiales exclusivos de las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la C.A. y 2016 de la C.A.C..’

Punto 40 del DPA,

‘Luego de las negociaciones entre la C. y la CONCACAF, se determinó que el equipo nacional masculino de seis asociaciones miembro de la CONCACAF, incluyendo el equipo nacional de los Estados Unidos, participarán de la C.A.C. con 10 equipos nacionales de la C.. Además, se determinó que el torneo se realizará en Estados Unidos en reconocimiento del crecimiento del mercado futbolístico en América del Norte. Posteriormente, D. celebró un contrato de USD35 millones con la CONCACAF, en su capacidad de coorganizador de la C.A.C., para adquirir los derechos de la CONCACAF.’

Luego de explicar de la operatoria del negocio a través de subsidiarias, T. admite el pago de sobornos, a través de sus socios, en el punto 41.

Punto 41 del DPA,

‘En relación con la adquisición de los derechos de la C.A. y de la C.A.C., T., a través de A.B., y de los socios de T. en D., acordó pagar y efectivamente pagó cientos de millones de dólares en sobornos a distintos representantes futbolísticos, incluyendo a L.B., R.E., S.J., J.W., Representante futbolístico #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12 y #13. Los socios de D. acordaron realizar estos pagos en distintos momentos mientras duren los contratos’.

Punto 42 del DPA,

‘La subsidiaria de T., P. de E. S.A., y sus socios de D. confiaron en las Empresas No Inscriptas, en J.M. y en los Intermediarios de M., entre otros, para realizar el pago de los sobornos a los representantes de la C. a través de las cuentas controladas por los accionistas de D. en relación con la C.A. y la C.A.C..’

Finalmente, T. referencia la conducta con las expresiones de los puntos 43 y 44 del DPA:

43. T. y sus co-conspiradores realizaron las transferencias desde lugares ubicados en los Estados Unidos para facilitar ciertos pagos para avanzar con su esquema criminal, incluyendo los relacionados con los T. mencionados en los párrafos 34 a 42, y para comunicarse con sus co-conspiradores. El uso de esos lugares ubicados en Estados Unidos incluye, entre otras cosas, el uso de cuentas bancarias que las subsidiarias y filiales de



T. tienen en instituciones financieras de los Estados Unidos para transferir cientos de millones de dólares para realizar el pago de los sobornos, y utilizaron las cuentas bancarias que los co-conspiradores, incluyendo a los Intermediarios M., tienen en instituciones financieras de los Estados Unidos para transferir millones de dólares para el pago de sobornos. T. y sus co-conspiradores confiaron en el creciente mercado futbolístico de los Estados Unidos para generar ganancias para el esquema y celebraron reuniones en los Estados Unidos para avanzar con dicho esquema.

44. 'T. y sus co-conspiradores realizaron acciones para evitar la detección de sus actividades ilegales, ocultar su ubicación y las ganancias obtenidas a través de esas actividades y promover la realización de esas actividades. La conducta de los miembros que participaron en la conspiración incluía, entre otras cosas: el uso de acuerdos por 'servicios de consultoría', facturas ficticias e instrucciones de pago y otros tipos de registros similares para simular la legitimidad de los pagos ilegales; el uso de varios mecanismos, incluyendo intermediarios (Intermediarios de M.), banqueros (incluyendo a los Banqueros #1 y #2), y agentes cambiarios para realizar y facilitar los pagos ilegales; la creación y uso de empresas fantasma; y el uso de dinero en efectivo.'

En este último punto, la empresa argentina reconoce la realización de acciones para ocultar su ubicación y las ganancias obtenidas, confirmando así, ella misma lo observado y plasmado a través de los distintos informes de grado de avance.

Al reconocimiento de T., se suma que las empresas del exterior que obtuvieron los derechos de transmisión de las distintas C., como TyC I. BV y especialmente P. de E. SA, no contaron con una estructura de activos y personal para haber desarrollado la tarea en los lugares en los cuales se llevaron a cabo los eventos, para poder generar la imagen internacional que se prestó a los distintos adquirientes.

Tanto PE como TyC actúan como extensión de la empresa controlante.

Hay una simulación ante terceros de una relación societaria que no existe.

T. pudo producir los distintos eventos a través de la compra de estos derechos de manera ilícita por parte de sus empresas controladas del exterior.

Estas sociedades actúan como sociedades aparentes o pantallas, siendo únicamente depositarias de beneficios que sin sus existencias serían percibidos directamente por T..



Ausencia de actividad, la renta no es el fruto de su actividad, sino de fines extra societarios.

Por lo expuesto, se considera que resulta de aplicación lo normado, en el Art.2 de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, y los artículos 119 inc. d), 128, 133 inc. a) y b), 146 inc. a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias...

Es por ello que se considera que de acuerdo a la realidad económica, corresponde proyectar el ajuste solicitado incorporando las ganancias obtenidas por las empresas del exterior como resultado de fuente extranjera a las respectivas DDJJ de T.YC. S.A.

El ajuste total determinado se compone de los puntos, que se detallan:

-Las ganancias de las subsidiarias a cada una de las DDJJ de Ganancias de T. por los balances al 31/12/2012 hasta el 31/12/2016.

-Las diferencias de cambio de los saldos impagos al 31/12/2015 y 31/12/2016 de las facturas de T&T Sports Marketing Ltd. (ver determinación de Informe 4)...

El 13/11/2017 se notificó el monto de impuesto a ingresar a que resulta de incluir los dos puntos detallados en 'Proyección del Ajuste'. En virtud de las ciertas observaciones realizadas por T., que se exponen en el punto IX), se han realizado correcciones, siendo los importes definitivos los que se detallan a continuación:

2012	17.303.158,25
2013	46.377.404,50
2014	161.824.065,38
2015	100.535.589,53
2016	158.146.242,35...

En su descargo T. argumenta distinta interpretación y alcance del DPA, considerando que no existen elementos para apartarse de la estructura formal utilizada en sus operaciones en el exterior, a tal efecto únicamente ha aportado el DPA y su traducción al español.

Nada ha aportado respecto a la producción de la señal internacional; de las manifestaciones del que fuera su CEO, A.B.; ni de otros aspectos que han sido observados a lo largo del presente informe.

En lo referido a la cuantificación del ajuste, se informa:

Se procedió a recalcular el porcentaje de T &T Sports Marketing Ltd, llevándolo al 25% de participación en los resultados. Asimismo, atento

haber aportado Anexos III legibles, se ha corregido el importe notificado, considerando como resultado del ejercicio 2016 de PE, \$ 407.721.948 y no \$ 417.721.946.

En relación al agravio de haber considerado \$ 417.721.946 (más allá de la corrección antes referida) como resultado del ejercicio 2016 de P. de E. SA (según surge del Anexo III de T.), y no considerar dólares 1.943.220,86, equivalente a \$ 30.683.457,38 (que surge del Balance de P. de E.), la empresa se limitó a exponer en su descargo, que la diferencia de \$ 387.038.488,62 no se encuentra gravada con el Impuesto a las Ganancias, sin aportar ningún elemento que permita verificar sus dichos.

Obsérvese que en los balances de P. de E. SA 2013 y 2014, la ganancia en dólares 20.036.493,78 y dólares 46.164.254,99, respectivamente, se corresponden con los resultados declarados por T. en el Anexo III, \$ 129.894.253,56 y \$ 390.033.416,47, respectivamente.

De considerar lo expresado por la empresa respecto del balance 2016, ésta debería haber expuesto los motivos por los cuales los ejercicios 2013 y 2014, no presentan dicha diferencia.

En cuanto al ejercicio 2015, el balance con que se cuenta esta expresado únicamente en pesos uruguayos y no ha sido motivo de observación respecto de la empresa.

En lo que se refiere al crédito de impuestos y al VPP de P. de E. SA, no ha aportado elementos que permitan verificar sus dichos.

Concluyendo esta fiscalización impulsa el ajuste en cuestión, en virtud de las siguientes consideraciones:

- Tanto P. de E. SA como TyCI. BV, interactúan como extensión de la empresa controlante.

- Se trata de mostrar ante terceros una relación societaria que no existe.

- T. pudo producir los distintos eventos a través de la compra de los derechos de transmisión y televisación de manera ilícita por parte de sus empresas controladas del exterior.

- Las empresas controladas, actúan como sociedades aparentes siendo únicamente depositarias de beneficios que, sin su existencia serían percibidos directamente por T..

- Ausencia de actividad ya que la renta de las subsidiarias, no es el fruto de su actividad sino de fines extra societarios..." (confr. fs. 2425/2434 de los autos principales).

8º) Que, con fecha 23/05/2018 se le recibió declaración testifical a la Inspectora de la división Fiscalización externa 1 de la Dirección de Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I.. E.O.,



quien, ante las preguntas confeccionadas por el señor representante del Ministerio Público Fiscal, manifestó: “...que ratifica el informe que se realizó con relación al contribuyente T.YC. S.A., reconociendo como suya una de las firmas que lo suscribe bajo su nombre. Respecto al informe referido, como primera medida se observaron inconsistencias respecto de firma D. S.A., que era señalada en la acusación del tribunal de los EE.UU. Se observa una empresa constituida en mayo 2013, que inmediatamente firma un contrato de adquisición de derechos de la C.A. con vigencia del año 2015 al año 2023, obteniendo ingresos como ventas no devengadas (VND) de canales de T. y empresas del rubro espectáculos deportivos de todo el mundo por cifras millonarias, ello indicaría que el negocio fue acordado con anterioridad a la creación de la empresa. Asimismo, infiero que la documentación que se exhibe formalmente lo es para dar un marco legal a un negocio ya concertado, o preexistente. Para mayores datos, me remito al punto 3 (B2) del informe presentado. Allí manifiesto por ejemplo que una empresa que no tiene personal en relación de dependencia y que su capital es de dólares 1.058,14 obtiene un contrato superior a dólares 317.500.000 con C. y dólares 35.000.000 con CONCACAF.

Partiendo de lo señalado en la acusación norteamericana, en cuanto a la existencia de tres grupos empresariales que participaron del negocio de la C.A., se determinó que la parte ‘T.’ en D., corresponde a su accionista P. de E. S.A., empresa uruguaya, igual que D., y controlada en un 100% por la contribuyente argentina T.YC. S.A.. Respecto de las empresas controladas en el exterior por esta contribuyente se desarrolla bajo el título 3-D ‘empresas vinculadas y controladas del exterior’ a las firmas en cuestión: P. de E. S.A. (100%), TyCI. BV (100%), T&T Sports Marketing LTD (25%) y Tele Net Image Corp. (40%). P. de E. presenta fundamentalmente un crecimiento muy importante en su patrimonio a través de lo expresado en el balance de T.YC., en relación a su participación. En forma llamativa tanto en el 2013 como en el 2014 triplica el resultado del año anterior, saltando de 51.000.000 a 130.000.000 para finalizar en el 2014 en 394.000.000 de dólares. También es citada la firma uruguaya en la acusación de los estados unidos como parte de la negociación concertada por los grupos empresariales. Respecto de su vinculación con D., P. de E. registra haber recibido cesión de derechos por 8.000.000 dólares, sin registrar D. habérselos cedido. Otra irregularidad observada durante la fiscalización es que la contribuyente T.YC. no factura por su producción de la señal internacional a las empresas de su propiedad que finalmente facturan conjuntamente el derecho con la señal a los usuarios (repetidoras de T., estado nacional, etc.). La importancia de la producción de la señal internacional fue reflejada muy concretamente en los balances de T.YC. S.A. como expectativa de ingresos en

el año 2014 para el evento C.A. 2015, tal como se referencia en el punto V 'Perspectivas de la sociedad', página 22 del informe. (El directorio de T.YC. informó 'la sociedad mira el año 2015 con optimismo considerando la demanda creciente de nuevos servicios de producción televisiva por parte de nuestro clientes y el calendario deportivo, en donde, la C.A. a disputarse en Chile es el evento descollante. T. ha sido contratado para la producción de la señal internacional de este evento'). Las inconsistencias que presenta la documental respecto de la real capacidad para prestar la señal internacional por parte de las controladas se especifican en el punto 6 del informe 'C.A. 2015. Compra de derechos. Producción de la Señal'. Y se amplía en los puntos 7 y 8. El despliegue necesario de medios y recursos para eventos de esta naturaleza puede observarse en el requerimiento practicado a TyC I. BV por parte del Dr. P. P. , coordinador del Programa Futbol para Todos en el evento Copa Mundial Brasil 2014, respecto sólo de la actuación de la selección argentina. La firma holandesa carece de equipos técnicos (cámaras, etc.), personal especializado periodistas deportivos, camarógrafos, etc.,) y organización de respaldo...

Preguntado por el Sr. Fiscal, con relación a la forma en que se determinó la pretensión fiscal que se expresa en el informe final de inspección para la contribuyente T.YC. S.A., manifestó: Más allá de los cruces con los balances de las subsidiarias a los que se pudo [tener] acceso y mayoritariamente se pudieron validar, se tomó homogéneamente el resultado informado para cada período fiscal por T.YC. S.A. como 'participación en otras sociedades' (Anexo III del Balance) como resultado de fuente extranjera aplicando la proporción de su participación. Ello se incorporó a la DDJJ de la contribuyente, rectificada respecto de otros ajustes que anteriormente habían informado como resultado de fuente extranjera. Respecto de la diferencia de cambio de los saldos impagos de las facturas de T&T Sports Marketing Ltd. (según informe de Avance N° 4) se incluyó solamente lo correspondiente al 2015 y 2016. En el último informe técnico se refirió que los ajustes antes determinados por estas mismas facturas, fueron regularizados por la empresa.

Preguntado por el Sr. Fiscal respecto al estado de trámite de la prevista informada a fs. 2450/2451, manifestó: que la empresa realizó una presentación sin aportar prueba alguna que significara una modificación en las determinaciones, que se compromete a enviar a esta Fiscalía copia de la misma. Asimismo se recibieron las actuaciones administrativas en devolución para armar un nuevo cuerpo con las principales pruebas y confeccionar un informe en el cual se condensen los datos con relación directa a la determinación..." (confr. fs. 2520/2522 vta. de los autos principales).



9º) Que, con fecha 15/11/2018, se recibió un nuevo informe confeccionado por el equipo de inspección conformado por la Inspectora E.O. y el supervisor W.B., de la Dirección Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I. relacionado con el trámite de la determinación de deuda en concepto de Impuesto a las Ganancias, en los términos del art. 18 de la ley 24.769, correspondiente al contribuyente T.YC. S.A.

Por aquel informe, se expresó: “... *La empresa acompañó constancias de haber ingresado impuestos en el extranjero por parte de las empresas vinculadas, PE y TyC I BV, indicando que corresponde a impuestos análogos a nuestro Impuesto a las Ganancias.*

Se verificaron los apostillados y se detrajo del resultado de ambas empresas los respectivos importes...

A los fines de la nueva determinación, se consideran los resultados indicados por T. en su explicación, que obran a fs. 529.

Se detrae los pagos de impuestos análogos en el extranjero.

Se detrae el VPP de empresas que resultan inversiones de D. SA., en los casos en los que las mismas se registran como inversiones.

Las Diferencias propuestas por la fiscalización... fueron las siguientes:

2012	23.905.339,28
2013	70.142.647,03
2014	208.844.500,25
2015	259.288.999,72
2016	154.005.359,14
TOTAL	716.186.845,42... ” (confr. fs. 2828/2862 de los autos principales).

10º) Que, con fecha 2/10/2020 la representación de la A.F.I.P.-D.G.I. acompañó una copia de la resolución N° 35/2020, dictada por el Jefe interino de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I., por la cual se determinó de oficio la deuda tributaria de A.B. en concepto de Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2015.

Por aquella resolución se expresó: “...*Que el presente procedimiento abarca el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2015.*

Que cabe señalar que las presentes actuaciones tuvieron su origen en el requerimiento de la Fiscalía interviniente en la Causa N° 56.753 /15 (C.N.A.P.E. 554/2015) caratulada ‘B., Alejandro; J., H. Victor; J., Mariano Alejo; T.YC. S.A., F.P. S.A. y Otros s/Infracción Ley 24.769’, que



tramita ante la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9, para que, con las limitaciones de rigor impuestas, tales como la imposibilidad de requerir a todos los sujetos involucrados, se determinara en cabeza del encartado la deuda prevista en el artículo 18 de la Ley 24.769 (Cuerpo Anexo III y fs.3 Cuerpo Anexo VI- O.I. 1.618.764).

Que, la mencionada causa deriva de la denuncia de funcionarios nacionales realizada en concordancia con la instruida en los EE.U.U. 'United States v. J.W., et, al' (popularmente conocida como FIFA-GATE), en las que se encuentran involucrados, además del contribuyente del asunto, altos dirigentes de la FIFA, C., CONCACAF, empresas relacionadas con la comercialización, transmisión, organización, etc., de eventos deportivos y sus directivos, acusados de participar en una maniobra delictiva consistente en el pago de sobornos a fin de asegurarse la renovación y/o el otorgamiento de los contratos de derechos sobre determinados espectáculos deportivos, organizados por las nombradas entidades

Que en el marco de la manda judicial mencionada, y como consecuencia de la verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias dispuesta por esta Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las atribuciones que le son propias, y llevadas a cabo por personal fiscalizador de esta Dirección, se observó que de su participación en la maniobra delictiva citada, el encartado obtuvo ganancias cuales fueran sustraídas del conocimiento del Fisco...

Que en el proceso judicial citado con anterioridad, se pudo establecer que D. S.A., empresa radicada en la República Oriental de Uruguay, conformada por la firma T. de Brasil, y las sociedades T.YC. S.A. (en adelante TyC) y F.P. S.A., domiciliadas en la República Argentina, cada una con el 33,33% de las acciones, (en el período fiscal en trato TyC no era accionista directa de D. sino a través de la sociedad del exterior P. de E. S.A., según inc.g) de la Nota 1 y Nota 11 de los EECC de TYC 2015) habría acordado pagar sobornos a los ejecutivos de la C. y CONCACAF, quienes además eran miembros de la FIFA, a cambio del otorgamiento de los contratos de derechos sobre los eventos deportivos C.A. 2015, 2019 y 2023, y C.A.C. 2016 (sede EE.UU.), que totalizaban un monto total de u\$s 352,50 millones (fs. 209 reverso- Cuerpo Ppal.-O.I. 1.385.117 y fs. 32 reverso – Cuerpo Anexo I- O.I. 1.618.764).

Que en dicho proceso llevado a cabo en EE.UU., al contribuyente de marras se le acusa de la comisión de los delitos denominados como cargos número uno (1)- Conspiración por fraude organizado-, treinta y nueve (39)- Conspiración por fraude electrónico-, y cuarenta (40)- Conspiración por lavado de dinero, a cuyos fundamentos, en mérito a la brevedad se remite (ver Cuerpo Anexo I – O.I. 1.618.764).

Fecha de firma: 16/08/2023

Alta en sistema: 17/08/2023

Firmado por: GUILLERMO RICARDO VILLELLA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA



#36037245#379615977#20230816120724898

Que en virtud de ello, el encartado en su primera declaración indagatoria llevada a cabo el 31/07/2015 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos- Distrito Este de Nueva York, se declaró no culpable, fijándose una fianza de aproximadamente u\$s 20 millones, integrada mayormente por acciones de la empresa T.YC. S.A. (10.032.000), por un valor que superaba los 15 millones de la misma moneda y otros bienes propios y de terceros (fs. 157 a 167- Cuerpo Anexo I – O.I. 1.618.764).

Que posteriormente, con fecha 16/11/2015, el rubrado cambió radicalmente su declaración, y ante el magistrado interviniente del mismo Tribunal, se declaró culpable de los tres cargos penales que se le imputaban

Que al efecto, en su declaración de admisión de culpabilidad manifestó que en varias oportunidades, en su carácter de accionista y luego también Gerente de T. y Competencia S.A., y a través de una UTE en la cual T.YC. S.A. era integrante, aceptó pagar sobornos a varios funcionarios de C., FIFA y otros relacionados con el fútbol para obtener y mantener los derechos de marketing de varios T. incluso la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, C.A. y las ediciones 2018, 2022, 2026 y 2030 de la Copa Mundial y de varios partidos amistosos, como así también los eventos citados anteriormente, esto es C.A., ediciones 2015, 2019 y 2023 (a través de D. S.A.), admitiendo que sabía que era altamente probable que el sistema bancario de los Estados Unidos sería utilizado para facilitar el pago de sobornos, por estar denominados en dólares estadounidenses (fs. 175 dorso, 176 frente y dorso- Cuerpo Anexo I – O.I. 1.618.7649).

Que además, en su declaración reconoció: 'T. y yo tuvimos ganancias de estos pagos de manera directa e indirecta, al asegurar estos derechos con una empresa de la que T. era accionista.' (fs. 176- Cuerpo Anexo I- O.I. 1.618.764).

Que ello también quedó plasmado en la Orden de Confiscación Preliminar parcialmente agregada a las actuaciones administrativas, atento a no contarse con copia completa traducida al español de la que puede leerse: 'A.B. (el demandado), presentó una declaración de culpabilidad para los Cargos 1,39,40... Por cuanto, el acusado reconoce que el dinero y las propiedades están sujetos a confiscación como resultado de sus violaciones... el acusado consiente la confiscación de lo siguiente: a) la suma de...(u\$s 21.694.408,49) que representan ganancias que el acusado obtuvo de ciertos contratos celebrados y/o retenidos por medio del pago de sobornos...', en concepto de suma cierta, junto con otros derechos sobre fondos depositados a nombre de sociedades donde tenía participación (fs. 177 dorso, 179- Cuerpo Anexo I- O.I. 1.618.764).

Que el encartado, con el fin de reflejar dicha situación, exteriorizó en su DDJJ del Impuesto a las Ganancias correspondiente al



período fiscal 2015, dentro del rubro 'Deudas del Exterior', la suma de \$ 280.725.645,86, equivalente al monto en dólares (u\$s) citado, al tipo de cambio vendedor del cierre del ejercicio, en concepto de Deuda Justicia EE.UU.

Que por otro lado se observó en la citada DDJJ, que dicha suma, tuvo como contrapartida, un incremento en la valuación de las Acciones que el rubrado poseía en T.YC. S.A., totalizando \$ 301.324.316,21, cuya valuación al inicio del ejercicio ascendía a \$ 20.598.670,35 (fs. 109 – Cuerpo Anexo V-O.I. 1.618.764).

Que no obstante ello, un mayor valor en la valuación de las acciones, sólo sería posible, de acuerdo a la legislación vigente, si el administrado hubiese aumentado su tenencia en el período de alguna forma, circunstancia que no aconteció.

Que ante todo lo expuesto se destacó que el rubrado en su admisión de culpabilidad, consintió la confiscación de la suma de u\$s 21.694.408,49, que de acuerdo a su expresa manifestación, representaban ganancias producidas de la maniobra delictual llevada a cabo, aceptación ésta, que se entendió como sumas percibidas por el circuito marginal de las operaciones efectuadas y sustraídas oportunamente del conocimiento y control del Fisco, al no haber sido nunca objeto de exteriorización en el impuesto en trato...

Por ello...

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Impugnar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015 correspondiente al contribuyente B., A., inscripto ante esta Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva bajo la C.U.I.T. N° 20-16921055-2, con domicilio fiscal y constituido en la calle Cerrito N° 1266 – Piso 8- Dto. '33' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que oportunamente presentada por el rubrado.

ARTICULO 2º: Determinar de Oficio el Resultado Neto de las Categorías –beneficio- en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 284.839.024,49).

ARTICULO 3º: Determinar de Oficio el Resultado Impositivo Final- ganancia en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015 en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 284.767.737,26).

ARTICULO 4º: Determinar de Oficio la Ganancia Neta Sujeta a Impuesto por el período fiscal 2015, luego del cómputo deducciones personales, en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS



CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 284.651.615,66).

ARTÍCULO 5º: Determinar de Oficio el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2015 en la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 99.614.565,48).

ARTICULO 6º: Imponerle la obligación de ingresar en concepto de Impuesto a las Ganancias, luego del cómputo de las retenciones y/o percepciones y/o pagos a cuenta, por el periodo fiscal 2015, la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 97.899.649,83).

ARTICULO 7º: Imponerle la obligación de ingresar en concepto de intereses resarcitorios, previstos en el artículo 37 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.), la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$ 168.543.710,81) calculados hasta el día 16 /09/2020, sin perjuicio de los que pudieran corresponder hasta el día del efectivo pago...” (confr. fs. 3608/3627 vta. de los autos principales).

11º) Que, por la resolución de fecha 3/09/2021, el juzgado de la instancia anterior, resolvió: “...HACER LUGAR al planteo de extinción de la acción penal [...] y en consecuencia DECLARAR EXTINGUIDA POR PAGO LA ACCIÓN PENAL emergente de la causa principal contra T.YC. S.A. (CUIT N° 30601591207), en orden a los hechos vinculados la presunta evasión de pago en concepto de impuesto a las ganancias a la que se habría encontrado obligada la contribuyente T.YC. S.A. por las sumas de \$ 23.905.339,28, \$ 70.142.647,03, \$ 208.844.500,25, \$ 259.288.999,72 y \$ 154.005.359,14 con relación a los períodos fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente y, en consecuencia, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de la persona jurídica nombrada (artículos 334 y 336, inc. 1º del CPPN y art. 16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley N° 27.430).

HACER EXTENSIVO el beneficio de la extinción de la acción en los términos del art. 16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27430 otorgado a T.YC. S.A., en orden a los hechos vinculados a J. M. R. (D.N.I. 20.206.151) y, en consecuencia, DECRETAR SU SOBRESEIMIENTO (artículos 334 y 336, inc. 1º del CPPN y art. 16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27430)...”.

Asimismo, por la resolución de fecha 26/10/2021, el juzgado “a quo”, dispuso: “...HACER EXTENSIVO a A.B. (D.N.I. N° 16.921.055) y a

L.M.E. (D.N.I. N° 21.923.960) el beneficio de la extinción de la acción en los términos del art. 16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27430 otorgado a T.YC. S.A. mediante el auto del 3/9/2021 y, en consecuencia, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de los nombrados (artículos 334 y 336, inc. 1° del CPPN y art. 16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27430)...” (confr. el incidente N° CPE 554 /2015/8, caratulado: “Incidente de extinción de la acción”).

12°) Que, por el punto dispositivo I de la resolución recurrida, el señor juez a cargo del juzgado de la instancia anterior dispuso: “...I. RECHAZAR la solicitud efectuada por el señor fiscal [por los dictámenes de fs. 2890/2920 y 3392/3397 de los autos principales, por los cuales requirió que se convoque a prestar declaración indagatoria a M.A.J., a H.V.J., a A.B., a L.M.E., a J. M. R. , a A. M. P. y a T.YC. S.A.]...”.

Por su parte, el punto dispositivo II de la misma resolución, el señor juez a cargo del juzgado “a quo”, dispuso: “...II. SOBRESEER a M.A.J...., H.V.J....y A. M. P. ...en orden a los siguientes sucesos: a) las supuestas evasiones de pago en concepto de Impuesto a las Ganancias a los que se habría encontrado obligada la contribuyente T.YC. S.A. por las sumas y períodos que a continuación se detallan: i) \$ 23.905.339,28 por el período fiscal 2012; ii) \$ 70.142.647,03 por el período fiscal 2013; iii) \$ 208.844.500,25 por el período fiscal 2014; iv) \$ 259.288.999,72 por el período fiscal 2015; y v) \$ 154.005.359,14 por el período fiscal 2016; y b) la supuesta evasión de pago de \$ 98.253.976,05 en concepto de Impuesto a las Ganancias, en orden al período fiscal 2015, al que se habría encontrado obligado A.B....”.

Por el punto dispositivo III de la resolución mencionada, se dispuso: “...III. SOBRESEER a J. M. R. ...y a L.M.E....en orden a la supuesta evasión de pago de \$ 98.253.976,05 en concepto de Impuesto a las Ganancias, en orden al período fiscal 2015, al que se habría encontrado obligado A.B....”.

Y por el punto dispositivo IV de la resolución mencionada, se resolvió: “...IV. SOBRESEER a A.B....M.A.J...., H.V.J...., L.M.E...., J. M. R. ..., A. M. P. ...y a la persona jurídica T.YC. S.A...., en orden a la presunta existencia de una asociación compuesta por más de tres personas, que al menos durante los años 2010 a 2016, habría estado destinada a cometer indeterminados delitos tributarios ...”.

13°) Que, en sustento de lo decidido, el juzgado “a quo” expresó: “...no se encuentra controvertido que, en principio, se han acreditado las hipótesis postuladas por el fiscal y la querella recordadas por los apartados 'a' y 'b' de la consideración I [consistente en “...a) las supuestas evasiones de



pago en concepto de Impuesto a las Ganancias a los que se habría encontrado obligada la contribuyente T.YC. S.A. por las suma y períodos que a continuación se detallan: i) \$ 23.905.339,28 por el período fiscal 2012; ii) \$ 70.142.647,03 por el período fiscal 2013; iii) \$ 208.844.500,25 por el período fiscal 2014; iv) \$ 259.288.999,72 por el período fiscal 2015; y, v) \$ 154.005.359,14 por el período fiscal 2016...”, y “...b) la supuesta evasión de pago de \$ 98.253.976,05 en concepto de Impuesto a las Ganancias, en orden al período fiscal 2015, al que se habría encontrado obligado A.B....”].

En efecto, en el marco del legajo N° CPE 554/2015/8 (formado a raíz de la presentación de la defensa técnica de T.YC. S.A. -CUIT N° 30-60159120-7- por la cual se postuló la extinción de la acción penal en los términos del art.16 del Régimen Penal Tributario previsto por el art. 279 de la ley 27430), el 3 de septiembre de 2021 se declaró extinguida por pago la acción penal emergente contra T.YC. S.A., en orden a los hechos vinculados [a] la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias a la que se habría encontrado obligada, por las sumas \$ 23.905.339,28, \$ 70.142.647,03, \$ 208.844.500,25, \$ 259.288.999,72 y \$ 154.005.359,14 con relación a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente; decretar al sobreseimiento de la persona jurídica nombrada; hacer extensivo el beneficio de la extinción de la acción en los términos del art.16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27430 otorgado a T.YC. S.A., en orden a los hechos vinculados a J. M. R. y, en consecuencia, decretar su sobreseimiento.

Posteriormente, en el marco de aquel legajo, con fecha 26/10/2021 se resolvió hacer extensivo a A.B. y a L.M.E. el beneficio de la extinción de la acción en los términos del art. 16 del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27430 otorgado a T.YC. S.A. mediante el auto del 3/9/2021 y, en consecuencia, decretar también el sobreseimiento de los nombrados.

24. Que, pasando a analizar la cuestión bajo estudio, primeramente cabe destacar que, respecto de los pronunciamientos recordados por la consideración que antecede ni el fiscal ni la parte querellante, oportunamente, han interpuesto recurso algún por lo que aquéllos han pasado en autoridad de cosa juzgada.

Con respecto a la solicitud del fiscal vinculada a que se convoque a prestar declaración indagatoria a M.A.J., H.V.J., A.B., Leonardo Martin E. , J. M. R. , A. M. P. , y a la persona jurídica T.YC. S.A. ‘...por su actuación en la realización de los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de evasión agravada (art. 2, inc. a y b) y asociación ilícita fiscal (art. 15, inc. c), reprimidos en la ley 24.769...’ recordada por el considerando 2 de la presente, debe señalarse que no tendrá una acogida favorable por este



juzgado. Ello, toda vez que, en primer lugar, de la prueba recabada en estos autos no surgen elementos que permitan establecer la participación de M.A.J., H.V.J., A.B., Leonardo Martin E. , J. M. R. y A. M. P. en las evasiones reprochadas a T.YC. S.A. (deuda ésta que fue cancelada) y a B. a título personal.

En efecto, de las constancias recopiladas en esta pesquisa surge que durante el período investigado:

i) H.V.J.: manejaba la cuenta corriente N° 1813536 de F.P. GROUP S.A. (accionista de D. S.A.) en Uruguay; y desempeñó los siguientes roles: Director Titular de D. S.A.; Presidente de F.P. INTERNATINAL TELEVISION S.A.; Directivo de FUTBOLESP S.A., F.P. S.A., CALCIO ONE S.A.; Accionista de F.P. ARGENTINA (50%) y Accionista de F.P. GROUP S.A.;

ii) M.A.J.: manejaba la cuenta corriente N° 1813536 de F.P. GROUP S.A. (accionista de D. S.A.) en Uruguay; firmó junto a B. el contrato con la C.; y desempeñó los siguientes roles: Presidente de D. S.A.; Vicepresidente de F.P. I. TELEVISION S.A.; Accionista de F.P. GROUP S.A.; y Accionista de F.P. ARGENTINA (50%);

iii) A.B.: firmó el contrato con la C. junto con M.A.J.; firmó como apoderado de TYC I. B.V. un acuerdo complementario por televisoraciones del Mundial 2014 con el Jefe de Gabinete el 15/5/2014; y desempeñó los siguientes roles: Director de D. S.A.; Presidente de T.YC. S.A. (2012/2014); Apoderado fiscal de HD SERVICES S.A. (empresa del grupo T.YC.); Apoderado de TYC I. B.V.;

iv) L.M.E.: firmó como apoderado de TYC I. B.V. una propuesta de acuerdo y el posterior acuerdo complementario al contrato de licencia del mundial 2014 con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina el 15/5/2014; y desempeñó los siguientes roles: Director de D. S.A. (2012 /2014); Director Titular de REVISTAS DEPORTIVAS S.A. y TyC MINOR S.A.; Vicepresidente de SOUTH AMERICAN SPORTS S.A. y COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.; Apoderado fiscal de HD SERVICES S.A. y de T.YC. S.A.; Director suplente de T.YC. S.A. (2013/2014); y Apoderado de TYC I. B.V.;

v) J. M. R. : firmó como apoderado de TYC I. B.V. el contrato de licencia por los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2014 con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina el 27/12/2012; en abril de 2014 firmó como apoderado de TYC I. B.V. un presupuesto vinculado a la venta al estado del equipamiento necesario para la transmisiones de eventos deportivos; firmante de la cuenta que T.YC. S.A. tiene en el banco ICBC; y firmó documentación del banco CITIBANK vinculada a operaciones de cambio realizadas por T.YC. S.A.; y desempeñó los siguientes roles:



Director de D. S.A. (2012/2014); Presidente de HD SERVICES S.A., COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A. Y SOUTH AMERICAN SPORTS S.A.; Vicepresidente de REVISTAS DEPORTIVAS S.A.; Apoderado fiscal de T.YC. S.A.; Director suplente de TONEOS Y COMPETENCIAS S.A. (2013 y 2014); y Apoderado de TYC I. B.V.; y

vi) A. M. P. : firmó como apoderado de TYC I. B.V. el contrato de licencia por los derechos de transmisión de la C.A. 2015 y Sudamericano Sub 20 2013 con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina el 27 /12/2012; firmó documentación del banco CITIBANK vinculada a operaciones de cambio realizadas por T.YC. S.A.; y desempeñó los siguientes roles: Director de D. S.A.; Presidente de MUSEOS DE PRIMERA S.A., TyC MINOR S.A., REVISTAS DEPORTIVAS S.A.; Vicepresidente de HD SERVICES S.A.; Director de COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A. y SOUTH AMERICAN SPORTS S.A.; Apoderado fiscal de T.YC. S.A.; Director suplente de T.YC. S.A. (2014); Apoderado de TYC I. B.V.

Nótese que ninguna de estas circunstancias guarda relación con las evasiones pesquisadas, si bien es cierto que todos han tenido relación con la firma D. S.A. y que por su parte B., E. , R. y P. han ocupado cargos directivos en sendas empresas del grupo T.YC., no se advierten elementos probatorios que los vinculen directamente con los sucesos investigados ni que, en función de los cargos desempeñados, hubieran llevado adelante conducta alguna tendiente a la consecución de aquellos hechos, en consecuencia, esa objetiva intervención de los nombrados no tiene relevancia penal a los fines de las evasiones impositivas mencionadas por la consideración 1 de la presente, ya que no hay elementos de cargo que acrediten que los nombrados hubiesen conocido las ganancias de la firma T.YC. S.A. y mucho menos las de A.B., gravadas en el Impuesto a las Ganancias y, en su caso, si tales obligaciones eran exteriorizadas y cumplidas en tiempo oportuno por los verdaderos responsables...

25. Que, en lo que concierne a la presunta existencia de una asociación compuesta por más de tres personas que, al menos durante los años 2010 a 2016, habría estado destinada a cometer indeterminados delitos tributarios (confr. apartado 'c' de la consideración 1), cabe recordar que con posterioridad a la resolución del 5/5/2016 (conf. Considerando 9), este tribunal sostuvo el 14 de mayo de 2019 que, con relación a las mencionadas solicitudes de fs.2890 a 2920 y 2990 a 2995vta., en punto a la eventual existencia de una asociación ilícita fiscal, no se advierte que con posterioridad al dictado de la resolución de fs. 1037 a 1045, punto I, por la cual se desestimaron parcialmente las presentes actuaciones en orden a la denuncia de asociación ilícita fiscal, hubieren variado sustancialmente, con motivo del avance de la investigación, las circunstancias que llevaron a su

dictado; por lo que también una convocatoria en aquel sentido no podría, por ahora prosperar...

26. Que, es dable destacar que, desde el momento del dictado del decreto del 14/5/2019 (confr. consideración precedente) a la fecha, tampoco se han incorporado nuevas probanzas ni elemento alguno que modifiquen sustancialmente el cuadro probatorio examinado en la oportunidad de adoptarse el temperamento que da cuenta el decisorio del 5/5/2016 confirmado por la Alzada.

No puede soslayarse que, mediante los dictámenes y presentaciones efectuadas por la parte querellante recordados por la consideración 1, no se describe maniobra alguna o hechos distintos a las evasiones impositivas y respecto de las cuales ya se encuentra firme el sobreseimiento dictado respecto de T.YC. S.A. (confr. apartado '1' del considerando 25). No se advierte la existencia de prueba alguna que acredite que los imputados habrían formado parte de un esquema tendiente a cometer, colaborar o coadyuvar indeterminadamente a cualquiera de los delitos tributarios, fuera ello, claro está, de las evasiones imputadas y por las cuales, se reitera, se sobreseyó.

En efecto, cuando la fiscalía sostiene la existencia de una 'asociación criminal que...ha sido conformada para la obtención de los contratos de exclusividad de derechos vinculados a eventos deportivos futbolísticos, su comercialización, todo ello mediante la comisión de delitos penales infracciones tipificadas en el país como evasión impositiva, y en el extranjero como delitos de sobornos, utilización fraudulenta del sistema bancario y lavado de dinero. Por lo cual, entiendo que los hechos descriptos, más allá de los ilícitos concretos de evasión, son penalmente relevantes a la luz de la figura penal contenida en el artículo 15, inc. 'c' de la ley 24.769', salta a las claras que aquellos delitos enumerados por el fiscal no son ninguno de los delitos tipificados en el referido art. 15, inc 'c' de la ley 24.769, sino que son delitos comunes los cuales han sido investigados en Estados Unidos de Norteamérica y en el marco de la causa N° CFP 7888/2015 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 (confr. consideraciones 3, 4 y 21 a 24 de la presente).

Asimismo, de lo sostenido por el fiscal en punto a que los imputados se hallaban intelectualmente en concierto delictivo evidenciando cada uno de ellos vocación intencional, tendiente a coincidir con el resto de los miembros y hacia un objetivo común, que en los hechos, era coadyuvar a la obtención de los derechos de los eventos deportivos, sus ulteriores ganancias, evitando desde el inicio el control estatal, se advierte que la finalidad de la supuesta asociación ilícita no sería otra que la de cualquier contribuyente que hubiere evadido sus obligaciones fiscales. Así también al



fundamentar su calificación en la existencia de un complejo entramado de personas físicas y jurídicas que se habrían interpuesto para ocultar al verdadero beneficiario de las ganancias, en el caso, T.YC. S.A., tal extremo podría llegar a configurar la agravante prevista por el inciso 'b' del art. 2 de la ley 24.769 pero esta circunstancia no resulta suficiente para aseverar que los imputados se encontraban inmersos dentro de las previsiones del art. 15 inc 'c' de dicha norma.

Por su parte, en punto a la habitualidad o permanencia a la que se refiere el art. 15, inc 'c' de la normativa antes aludida, aquélla requiere de elementos adicionales a la sola reiteración de una misma hipótesis de omisión de pago de impuestos, de lo contrario nótese que todas las causas en las que se evade más de un período fiscal serían asociaciones ilícitas cuando en realidad constituyen concursos de delitos.

En efecto, no surgen del expediente suficientes circunstancias como para considerar que en el caso haya existido el concierto de voluntades que caracteriza a la figura.

En el mismo sentido, en cuanto a la sofisticación del ardid alegada por la fiscalía, tampoco se advierte relación con la asociación ilícita fiscal sino simplemente se vislumbra la idoneidad del medio empleado para cometer las evasiones.

En conclusión, se reitera, con los elementos reunidos en el expediente no es posible afirmar que la finalidad de los imputados haya sido la de cometer delitos fiscales de forma habitual, no se encuentran reunidos los requisitos típicos de la asociación ilícita fiscal, la reiteración de la modalidad delictiva utilizada y de identidad de los imputados no es suficiente para agrupar esta multiplicidad de hechos en una asociación ilícita fiscal, estable y persistente en el tiempo. Y además, distinta de las investigaciones en el fuero Federal y en los EE.UU.

27. Que, por todo lo expuesto por la presente, corresponde rechazar la solicitud del fiscal recordada por el considerando 2 y desvincular a los imputados, definitivamente, de la investigación... ”.

14º) Que, por el recurso de apelación presentado el 24/11/2021, el señor representante del Ministerio Público Fiscal que actúa ante la instancia previa manifestó: “...Para arribar al resultado desincriminatorio, a lo largo del resolutorio cuestionado, reproduce datos objetivos adunados al expediente, carentes de una argumentación que reviertan los hechos sostenidos por esta representación.

En primera medida, discrepo con la valoración de la prueba ensayada por V.S., pues entiendo que existe material suficiente y contundente para sostener la existencia de tales hechos delictivos para achacárselos a los

perseguidos de acuerdo con lo previsto por el art. 294 del CPPN. Considero, además, que se encuentra objetivamente acreditada la existencia de la asociación ilícita investigada, y que resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos escuchar a los imputados en el marco de una declaración indagatoria.

Si bien, tal como surge del relato del considerando 9, es acertado que mediante el resolutorio de fs. 1037 a 1045, se ordenó desestimar parcialmente las actuaciones, en orden a la denuncia de asociación ilícita fiscal y a la supuesta evasión fiscal respecto de los períodos no prescriptos penalmente, en lo que se refiere a la denuncia del delito de lavado de activos que toma como delito precedente a las presuntas evasiones tributarias investigadas en autos; y sin perjuicio de haber confirmado dicho resolutorio en instancia revisora, tal como recuerda V.S. en el considerando 10, no debe perderse de vista que: 'La desestimación de la denuncia penal no impide la prosecución de las actuaciones...

Es necesario recordar que aconteció en el expediente: con posterioridad al dictado de la resolución de fs. 1037 a 1045, mediante el decreto de fecha 9 de septiembre de 2016, en virtud de la instrucción delegada en aquel momento en esta representación del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Diego García Berro tuvo por ampliado el objeto procesal del sumario, dispuesta en el punto II del dictamen agregado de fs. 1264 a 1265...

Así también se revela en las consideraciones formuladas al resolver en los incidentes CPE 554/2015/7 y CPE 554/201/8: siempre se incluyó el hecho relacionado con la figura descripta en el art. 15, inc c) de la le 24.769 como parte integrante del objeto procesal.

Es que esta fiscalía viene sosteniendo esa hipótesis desde los albores de la compleja investigación llevada a cabo mientras la dirección de la investigación estuvo delegada...

Por ello, el alcance que se pretende dar al decreto del 14 de mayo de 2019 ya citado es por demás desacertado. Encontrándose ampliado el objeto procesal promovido por el Ministerio Público, la investigación de los hechos por los cuales se requiriera de manera insistente que los imputados sean convocados a prestar declaración indagatoria en orden a la presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal no encuentra reparos...

Así lo entendió, el juez Marcelo Aginsky cuando, con posterioridad, el 15 de septiembre del 2020, en oportunidad de convocar a A.B. a prestar declaración indagatoria, tuvo presente el requerimiento de esta parte para que la firma T.YC. y los demás imputados sean convocados en los términos del art. 294 del CPP, y formó incidente de falta de acción, decisión que no sería procesalmente compatible con la inexistencia del impulso de la acción en el proceso...



Por ello, la negativa a convocar a los imputados a prestar declaración indagatoria, conforme lo expresado en punto I del resolutivo en crisis, basándose simplemente en argumentaciones formales, presupone una arbitrariedad, y obstaculiza la prosecución de la causa, causando a esta parte un perjuicio irreparable...

De más está decir que ese tribunal reasumiera la dirección de la investigación no se produjo de oficio ni a instancias de ninguna de las defensas de los imputados, prueba alguna que controvierta las afirmaciones tanto de este Ministerio Público como de la querella.

Por ello, es que la desincriminación de los imputados articulada en los puntos II y III atacados, frente a la profusa prueba colectada, y la hipótesis delictiva presentada por esta parte, resulta huérfana de todo fundamento y se aparta de las constancias probatorias reunidas en el sumario, objeto de valoración en cada uno de los dictámenes formulados por el Ministerio Público al solicitar la convocatoria de los acusados.

Con el objetivo de no ser reiterativo, ni transcribir en esta pieza procesal los detalles que fueran reflejados en cada uno de los pedidos de indagatoria producidos en el expediente, los que aquí doy como reproducidos, a modo de ejemplo voy a citar elementos que fueran agregados, con posterioridad a que se adopten las resoluciones que merito en las funda V.S. la falta de elementos de convicción, que han sistemáticamente reafirmado la imputación aquí cursada, la relación entre los imputados, la coordinación de tareas, la concreta actividad realizada por cada uno de ellos, la continuidad en el tiempo reafirmando dicho vínculo, y las consecuencias lesivas de su accionar.

En las determinaciones de oficio, producidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos a requerimiento de esta representación se determinó el entramado societario que fuera interpuesto frente al fisco nacional, particularmente la participación de D. en el hecho imponible, que redundara en las evasiones, tanto de T.YC. S.A. como en la de A.B..

La hipótesis de la fiscalía, existente desde los albores de la investigación, se volvió robustecida y contundente también con la confesión de A.B. ante los tribunales de Estados Unidos de Norte América. De hecho, fueron incorporados al expediente, informes relacionados con aquella investigación. Es más, en marzo de este año, conforme fuera informado a ese estrado, mediante nota cuya traducción también fue incorporada a las actuaciones remitidas a esa sede, se prevé el dictado de sentencia para noviembre de este año. Si bien en los considerandos 15 y 20 de la resolución

cuestionada se hace referencia a su declaración de culpabilidad, no se le otorga el alcance vislumbrado tanto por este Ministerio Público ni por la querella.

Igualmente, las investigaciones desarrolladas en otros fueros, dan cuenta también de la actuación de los aquí imputados, dirigiendo los negocios relacionados con el contrato producido por D., en ese caso con el estado nacional, determinándose incluso la posible existencia de irregularidades en ese accionar.

Véase, por otra parte, que de adverso a lo sostenido en la resolución que aquí se impugna -como fundamento del temperamento adoptado- el tribunal hizo mención a los autos 7888/2015 que tramitan por ante el Juzgado Federal n° 3 dando cuenta -erróneamente- que en ese expediente se había dispuesto desestimar los hechos denunciados- lavado de activos- art. 303 del C.P.- reprochado a A.B. (art. 180, 3ª del C.P.P.N) y sobreseer, entre otros, a J. M. R. , Leonardo E. , A. M. P. , y A.B., en orden al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública -art. 174 inc. 5º, en función del 173 inc. 7º del C.P.- (art. 336, inc. 3º del C.P.P.N.) cuando, a la fecha, ese decisorio fue oportunamente revocado por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal en el entendimiento de que no podía desvincularse a los nombrados de las maniobras que fueran denunciadas y disponiendo gran cantidad de medidas de prueba tendientes a verificar justamente la existencia de relaciones entre los imputados, las empresas y funcionarios del Estado.

Más aún, el tribunal de Alzada sostuvo que aquéllos junto a H.V.J., M.A.J., habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el Seleccionado Argentino de Fútbol desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (C.). Tales ilícitos, que se hallaban investigados por la justicia de los Estados Unidos de América, les habría permitido a sus empresas -'F.P. I. S.A' y 'T.YC. S.A.'- vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional obteniendo ganancias exorbitantes en detrimento del patrimonio público...

Por ello, a la luz de los hechos investigados ya desarrollados y la prueba obrante en autos, es que entiendo que no solo bajo ningún aspecto se verifica la certeza necesaria para resolver en forma remisorio a su respecto, sino que, por el contrario, el plexo probatorio resulta más que suficiente para disponer sus llamados en indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.



... respecto de M.A.J., H.V.J., A.B., L.M.E., J. M. R. , A. M. P. , y la razón social T.YC. S.A. por los hechos ya individualizados, objeto del sumario, y calificados en orden a los artículos 2 inc. a y b y 15 inc. c de la Ley 24.769.

Reitero que las conductas reprochadas se corresponden entonces con la evasión del Impuesto a las Ganancias de los contribuyentes T.YC. S.A. y la de A.B., y se originan con la adquisición a la Confederación Sudamericana de Fútbol de derechos de producción televisiva, marketing, comercialización, etc. de eventos deportivos, mediante la interposición de una firma inscripta en la República Oriental del Uruguay: D. S.A., mediante la firma de un contrato el 25 de mayo de 2013 en Londres, eventos que fueron denominados 'C.A.'.

Particularmente, con relación a la participación necesaria de M.A.J., A.B., L.M.E., J. M. R. , y A. M. P. en las evasiones agravadas de los impuestos correspondientes a la contribuyente T.YC. S.A. y A.B. -quien al momento de los hechos era directivo y accionista de la primera- llama poderosamente la atención la afirmación practicada por V.S. en cuanto a que sin perjuicio de haber integrado la firma D., ser titulares en sus cuentas corrientes, haber sido apoderados fiscales de la obligada, autoridades de las empresas que componen el grupo económico, controladas por T.YC. S.A., haber participado en carácter personal como apoderados, en transacciones con el estado nacional dónde se involucran los productos objeto del contrato firmado por D., ello no conforma la participación exigida por el art. 14 de la Ley 24.769...

Entiendo así que no se ha valorado elemento alguno que permita adoptar un temperamento remisorio respecto de los nombrados en los hechos referidos. En cada uno de los dictámenes por los que esta representación del Ministerio Público delimitó el objeto del expediente y solicitó el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados se argumentó sobradamente y de manera contundente respecto del modo en que su accionar redundó en las evasiones perpetradas. De hecho, no se han incorporado a posteriori de los dictámenes aludidos prueba alguna que desvirtúe los argumentos allí esgrimidos, ni nada de esto ha sido rebatido en la resolución que aquí se ataca.

Finalmente, en el punto dispositivo IV, V.S. considera que es pertinente dictar el sobreseimiento de A.B., H. J., M.A.J., L.M.E., J. M. R. , A. M. P. y de la persona jurídica T.YC. S.A. en orden a la presunta existencia de una asociación compuesta por más de tres personas que, al menos durante los años 2010 a 2016 habría estado destinada a cometer delitos tributarios, en los términos previstos por el art. 336, inc 2 y 15 inciso c) de la ley 24.769. Para arribar a dicha solución, en los considerandos 25 a 27, retoma datos objetivos adunados al expediente a los que hiciera alusión precedentemente, carentes

de una argumentación que reviertan los hechos sostenidos por esta representación para sostener el llamado a indagatoria de los nombrados con relación al hecho de asociación ilícita hartamente fundado en los sucesivos dictámenes...

Nuevamente, a guisa de no ser reiterativo, en las distintas oportunidades ya mencionadas, se argumentó con relación a la existencia de una asociación ilícita fiscal en base a la contundente prueba producida mientras esa representación del Ministerio Público tuvo a su cargo la dirección de la investigación.

Porque para poder afirmar la existencia de una asociación ilícita fiscal puede sostenerse que cada uno de los miembros participaron, con diferentes aportes, para cumplir con la finalidad de esta, mediante la creación meramente formal de sociedades para la obtención de los derechos económicos de distintos eventos futbolísticos, ya desarrollado en extenso en el presente, así como también en los distintos dictámenes incorporados al expediente...

En relación con los elementos del tipo, se encuentran presentes los tres elementos que lo caracterizan: formar parte de una asociación u organización que debe formarse mediante el acuerdo de voluntades de sus integrantes; número mínimo de tres personas que la integren y tener el propósito de cometer alguno de los delitos previstos por la ley 24.769, en el caso evasiones impositivas agravadas, además de otros ilícitos comunes.

El elemento 'asociación o banda' exige únicamente un grupo con cierto número de integrantes (tres como mínimo), entre los cuales debe existir la suficiente cohesión como para que puedan reconocerse entre sí como tales y el compromiso recíproco de aceptar la voluntad del grupo, de modo relativamente correspondiente a la affectio societatis de una sociedad de hecho...

Por ello, existiendo delitos de la Ley Penal Tributaria cometidos por este grupo de personas, en concierto de voluntades para su comisión, y claramente un sofisticado ardid desplegado para ello, lo dispuesto por V.S. además de prematuro no se encuentra fundado en las probanzas del sumario, por lo que importa para esta representación un agravio irreparable, en miras de la vigencia de la acción penal en este expediente... ”.

15º) Que, por el recurso de apelación presentado el 25/11/2021, el representante de la querrela (A.F.I.P.-D.G.I.) expresó: “...En primer término cabe destacar que si bien la sentencia resuelve, del modo transcripto, ordenando el sobreseimiento de los imputados, las causales que subyacen



dicho decisorio para así resolver difieren substancialmente en su motivación y también en sus derivaciones e implicancias con relación a las acreencias que mi mandante determinara oportunamente de oficio.

En efecto, en el considerando 24 V.S. sostiene que 'no se advierten elementos probatorios que los vinculen directamente con los sucesos investigados ni que, en función de los cargos desempeñados, hubieran llevado adelante conducta alguna tendiente a la consecución de aquellos hechos, en consecuencia, esa objetiva intervención de los nombrados no tiene relevancia penal a los fines de las evasiones impositivas, ya que no hay elementos de cargo que acrediten que los nombrados hubiesen conocido las ganancias de T.YC. S.A. y mucho menos de las de A.B., gravadas en el impuesto a las ganancias y, en su caso, si tales obligaciones eran exteriorizadas y cumplidas en tiempo oportuno por los verdaderos responsables'.

Sin embargo, se encuentra probado a lo largo de la presente causa el rol que los imputados ocupaban en las empresas, como las acciones concretas realizadas (firma de contratos, conformación de sociedades, comercialización de productos), su relación directa con la firma D. S.A. desembocando en las ganancias millonarias que obtuvieron (producto de hechos que se investigan en otras jurisdicciones) y como consecuencia evadiendo sus obligaciones tributarias...

A partir de las constancias obrantes en la causa, no caben dudas sobre la extraordinaria actividad comercial y consecuente ganancia que para cada uno de los investigados ha generado el contrato firmado mediante la interposición de D. S.A., omitiendo ingresar los tributos correspondientes a dichas ganancias...

Con este recurso, se pretende demostrar al a quem que el pronunciamiento respecto de las evasiones debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido, por falta de fundamentación y arbitrariedad. Ya que analiza los elementos probatorios aportados a lo largo de esta etapa embrionaria, simplemente sostiene que no encuentra elementos que vinculen a los imputados con los hechos investigados.

Por ello, esta querella no comparte los fundamentos de la resolución apelada, toda vez que en el caso existen elementos suficientes que acreditan la existencia del dolo requerido para la configuración del delito previsto y reprimido por el artículo 2º inc. 'a' y 'b' de la ley 24.769 y por ende tornan viable la continuación del trámite de las actuaciones...

Asimismo, al considerar que 'se advierte que la finalidad de la supuesta asociación ilícita no sería otra que la de cualquier contribuyente que hubiere evadido sus obligaciones fiscales', V.S. está a las claras minimizando toda la prueba obrante en la causa, en la cual se demuestran las acciones que cada uno de los responsables de las contribuyentes en cuestión desplegaron

en forma sistemática, redundado en las evasiones que se persiguen en razón de que tanto la división de tareas que se pudo observar (mientras unos se registraban como autoridades frente a los organismos de control, otros como apoderados frente a los clientes, o como contactos entre el grupo y entes transnacionales como la C., otros aportaban sus cuentas corrientes en el exterior, finalmente todos ellos ocupaban cargos en la dirección de D. S.A.) como las acciones concretas realizadas (firma de contratos, conformación de sociedades, comercialización de productos), conformó una conducta de gravedad particular. En el caso, los volúmenes operados, la continuidad en el tiempo y el impacto criminal transfronterizo de las conductas realizadas, implican claramente un mayor grado de eficiencia de la maniobra delictiva y /o una mayor productividad del hecho delictuoso, ello como consecuencia de su accionar mancomunado.

Por lo tanto, cada uno los imputados ha 'tomado parte' en la asociación y manifestado de una forma u otra, su sentido de pertenencia hacia la organización delictiva. Nótese que el comportamiento exigido por el artículo 15, inc. C de la ley 24.769, implica ni más ni menos, que estas personas se hallan intelectualmente en concierto delictivo con la agrupación evidenciando así, en cada uno de estos agentes una vocación intencional, tendiente a coincidir con el resto de los miembros y hacia un objetivo común, que en los hechos, era coadyuvar a la obtención de los derechos de los eventos deportivos, sus ulteriores ganancias, evitando desde el inicio el control estatal.

En ese orden de ideas, el panorama descripto lejos está de tratarse de 'concurso de delitos' ya que con el grado de provisoriedad de la etapa procesal que nos ocupa, podemos considerar que no estamos solo frente a evasiones reiteradas, sino a una organización compuesta por un entramado de acciones cometidas por personas con un fin en común... ”.

16º) Que, como regla general, de la cual en el caso no ameritan motivos para apartarse, el rechazo de una solicitud de citación a prestar la declaración indagatoria a un imputado no constituye una resolución expresamente declarada apelable por la ley procesal, ni ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior (art 499 del C.P.P.N., confr., Regs. 820/03, 1022/04, 895/08, 216/11, 269/12, 207/13, CPE N° 850/2016/1/RH1, res. del 5 /03/2017, Reg. Interno N° 277/17; CPE 1554/2017/1/CA1, res. del 6/09/2018, Reg. Interno N° 731/18; CPE 210/2017/CA1, res. del 20/02/2019, Reg. Interno N° 54/19, CPE 873/2018/1/RH1, res. del 29/02/2020, Reg. Interno N° 67/20, CPE 1006/2013/5/RH1, res. del 13/05/2021, Reg. Interno N° 293/21 y FRO 27423/2017/3/RH2, res. del 23/06/2021, Reg. Interno N° 406/21, entre otros, de esta Sala “B”).



Por lo tanto, los recursos de apelación interpuestos contra el punto dispositivo I de la resolución de fecha 17/11/2021 han sido erróneamente concedidos, lo que debe ser declarado así.

17º) Que, previo a ingresar en el análisis de la cuestión de fondo, corresponde examinar los agravios invocados por el representante de la querella (A.F.I.P.-D.G.I.) tendientes a descalificar los autos de sobreseimiento apelados como actos jurisdiccionales válidos, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad.

En este sentido, corresponde expresar, en primer lugar, que según ha establecido este Tribunal en oportunidades numerosas, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2 del C.P.P.N.) y solo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, 1170/00, 533/07, CPE 5561/2010/3/CA1, res. del 11/12/2015, Reg. Interno N° 602/15, CPE 2027/2011/1/CA1, res. del 4/03/2016, Reg. Interno N° 72/16, y CPE 1042/2018/8/CA3, res. del 18/02/2021, Reg. Interno N° 42/21, entre muchos otros, de esta Sala “B”).

18º) Que, para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios de fundamentación, aquella debe mostrar omisiones sustanciales de motivación, o resultar autocontradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas. En principio, aquellos defectos no se advierten palmarios en la resolución recurrida, que ofrece una motivación de lo decidido, independientemente de la coincidencia, o no, que se puede tener con aquellas conclusiones.

19º) Que, por lo tanto, se advierte que la arbitrariedad y la carencia de una motivación adecuada, aludidas por el representante de la querella (A.F.I.P.-D.G.I.), sólo constituye una discrepancia de aquella parte con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos principales y con las conclusiones a las cuales se arribó por la resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez de los autos de sobreseimiento examinados por la presente.

20º) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza o al alcance probatorio de los elementos incorporados a la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se



exige para el dictado de los autos de sobreseimiento (art. 337 del C.P.P.N.) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos -como el que se presenta en el “*sub lite*”- en los cuales por los autos impugnados, se cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (confr. Regs. Nos. 923/03, CPE 556/2010/3/CA1, res. del 11/12/2015, Reg. Interno N° 602/15 y CPE 2027/2011/1/CA1, res. del 4/03/2016, Reg. Interno N° 72/16, de esta Sala “B”).

21°) Que, conforme se ha establecido por numerosos pronunciamientos anteriores de ambas Salas de este Tribunal, el sobreseimiento es la resolución jurisdiccional por la cual se concluye el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado en cuyo favor se dicta, y encuentra fundamento en las causales taxativamente previstas por la ley. Por consiguiente, para el dictado de un auto de sobreseimiento con aquellos alcances es necesaria la certeza del juzgador sobre la configuración de alguna de las causales previstas por el artículo 336 del C.P.P.N. (confr. C.F.C.P., Sala I, “*NAVARRO, Juan Manuel y otros s/ recurso de casación*”, rta. 23/05/2001; Sala III, “*SAKSIDA, Walter Raúl s/ recurso de casación*”, rta. el 18/2/2000; Sala IV, “*SANTOS, Enrique José s/ recurso de casación*”, rta. el 22/11/1999; y Regs. Nos. 634/03, 394/06, 463/06, 655/06, 719/06, 655/09, CPE 970/2016/4/CA2, res. del 10/07/2019, Reg. Interno N° 470/19, CPE 1259/2017/CA2, res. del 18/11/2020, Reg. Interno N° 529/20, CPE 648/2019/8/CA4, res. del 9/02/2021, Reg. Interno N° 29/21, CPE 1618/2018/6/CA2, res. del 14/02/2022, Reg. Interno N° 36/22, y CPE 970/2017/6/CA2, res. del 15/02/2022, Reg. Interno N° 39/22, entre otros, de la Sala “B” y Registros N° CPE 1677/2017/1/CA1, res. del 22/10/2019, Reg. Interno N° 703/19, CPE 1157/2017/CA2, res. del 18/12/2019, Reg. Interno N° 827/19, CPE 943/2010/27/CA7, res. del 30/06/2020, Reg. Interno N° 173/20, y CPE 1399/2017/2/CA2, res. del 19/11/2020, Reg. Interno N° 383/20, entre otros, de la Sala “A”).

22°) Que, en el caso, contrariamente a lo estimado por el tribunal de la instancia previa, en función del examen de las constancias incorporadas actualmente a la causa y de los agravios manifestados por las partes recurrentes, se advierte que no se ha alcanzado, a partir de los resultados obtenidos hasta el momento por la pesquisa, el estado de certeza al cual se hizo alusión por el considerando anterior acerca de la configuración de alguno de los supuestos previstos por el art. 336 del C.P.P.N. respecto de M.A.J., de H.V.J. y de A. M. P. , con relación a los hechos supuestos de evasión de las sumas de \$ 23.905.339,28, \$ 70.142.647,03, \$ 208.844.500,25, \$ 259.288.999,72 y \$ 154.005.359,14, a cuyo pago habría estado obligada la

Fecha de firma: 16/08/2023

Alta en sistema: 17/08/2023

Firmado por: GUILLERMO RICARDO VILLELLA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA



#36037245#379615977#20230816120724898

contribuyente T.YC. S.A. por el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

Por otro lado, tampoco se ha alcanzado el estado de certeza al cual se hizo alusión por el considerando anterior acerca de la configuración de alguno de los supuestos previstos por el art. 336 del código mencionado respecto de L.M.E. y de J. M. R. , con relación al hecho supuesto de evasión de la suma de \$ 98.253.976,05, a cuyo pago habría estado obligado A.B. por el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2015.

23º) Que, en efecto, por la misma resolución apelada el señor juez a cargo del juzgado de la instancia anterior consideró que “...en principio, se han acreditado las hipótesis postuladas por el fiscal y la querella recordadas por los apartados 'a' y 'b' de la consideración 1 [consistentes en: “...a) las supuestas evasiones de pago en concepto de Impuesto a las Ganancias a los que se habría encontrado obligada la contribuyente T.YC. S.A. por las suma y períodos que a continuación se detallan: i) \$ 23.905.339,28 por el período fiscal 2012; ii) \$ 70.142.647,03 por el período fiscal 2013; iii) \$ 208.844.500,25 por el período fiscal 2014; iv) \$ 259.288.999,72 por el período fiscal 2015; y, v) \$ 154.005.359,14 por el período fiscal 2016...”; y: “...b) la supuesta evasión de pago de \$ 98.253.976,05 en concepto de Impuesto a las Ganancias, en orden al período fiscal 2015, al que se habría encontrado obligado A.B....”]”.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo que surge del informe confeccionado por el equipo de inspección de la Dirección Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I. relacionado con el trámite de la determinación de deuda en concepto de Impuesto a las Ganancias, en los términos del art. 18 de la ley 24.769, correspondiente al contribuyente T.YC. S.A., obrante a fs. 2357/2436 de los autos principales, parcialmente transcripto por el considerando 7º de la presente, y de la resolución N° 35/2020, dictada por el Jefe interino de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I., por la cual se determinó de oficio la deuda tributaria de A.B. en concepto de Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2015, cuya copia obra a fs. 3608/3627 de los autos principales, parcialmente transcripta por el considerando 10º de la presente, las evasiones mencionadas se habrían producido mediante la ocultación de ganancias millonarias obtenidas por aquellos contribuyentes por la comercialización de derechos sobre determinados T. de fútbol organizados por la FIFA, la C. y la CONCACAF, para lo cual se habrían utilizado distintas sociedades vinculadas y controladas



por T.YC. S.A. y por A.B., tales como D. S.A., radicada en la República Oriental del Uruguay, P. de E. S.A., TYC I. BV, T&T SPORTS MARKETING LTD y TELE NET IMAGE CORP, los autos de sobreseimiento dictados por los puntos dispositivos II y III de la resolución recurrida resultan, al menos, prematuros, pues por aquella misma resolución se destacó la intervención que habrían tenido M.A.J., H.V.J., A. M. P. , J. M. R. y L.M.E. en las distintas sociedades utilizadas para producir las evasiones que se consideraron acreditadas por el juzgado “a quo”.

24º) Que, la ocultación de las ganancias obtenidas por T.YC. S.A. y por A.B. en el período comprendido entre el año 2012 y 2016, y la intervención de las sociedades mencionadas por el considerando anterior para lograr aquel objetivo, en principio, habría sido reconocida por el nombrado en la declaración prestada el 16/11/2015 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se declaró culpable de los delitos identificados como “DELITO UNO”, “DELITO TREINTA Y NUEVE” y “DELITO CUARENTA” de la acusación formulada por los fiscales en el expediente N° #2015R00747, caratulado: “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA J.W., E.L., J.R., C.T., J.W., E.F., R.E., J.M.M., N.L., A.B., A.D., H. J., M.J. Y J.M.”, cuya traducción al idioma español se agregó a fs. 547/602 de los autos principales, reseñados por el considerando 6º de la presente.

En efecto, por aquella declaración A.B. manifestó: “...*Mi nombre es A.B.. En el año 2005, adquirí una participación minoritaria en una empresa llamada T.YC.. La llamaremos T. de aquí en adelante. T. es una empresa de producción de T. para deportes que es propietaria de un canal de deportes local en Argentina y tiene 800 empleados en Argentina. En octubre de 2006, fui presidente de T..*

Alrededor del año 2005, un socio fundador de T. me informó que una unión transitoria de empresas en la que participaba T., obtuvo los derechos televisivos para transmitir los T. de fútbol de América del Sur en parte haciendo pagos de sobornos a funcionarios de la Confederación de Fútbol de América del Sur.

Una de las seis confederaciones continentales de FIFA, que es comúnmente conocida como C.. Me informaron que el acuerdo ha sido efectivo por algún tiempo. Sé que debía haberme retirado en ese punto, pero, en lugar de eso, acepté trabajar para T. y acordé tomar un rol activo en los esquemas de sobornos. Lamento la decisión. Me equivoqué.

En varias oportunidades desde 2005 y hasta 2015, acepté pagar y efectivamente pagué sobornos a varios funcionarios de C., FIFA y otros relacionados con el fútbol para obtener y mantener los derechos de marketing



de varios T., incluso la Copa Libertadores. La copa Libertadores, Copa Sudamericana, C.A. y las ediciones 2018, 2022, 2026 y 2030 de la Copa Mundial y a varios partidos amistosos. Sabía que los funcionarios estaban usando sus posiciones de autoridad y confianza para enriquecerse.

Durante este período, FIFA, C., CONCACAF, que es la confederación con asiento en Estados Unidos y otras organizaciones relacionadas con el fútbol y empresas de M.D. estaban involucradas en la promoción y regulación del fútbol en todo el mundo como parte de una organización permanente. Entre otras cosas, estas organizaciones realizaban eventos deportivos y tenían negocios en los Estados Unidos además de utilizar instituciones financieras con base en los Estados Unidos. Los sobornos no se revelaron a FIFA, CONCACAF o C..

...Los presidentes de la federación acordaron respaldar los contratos por la Copa Libertadores, Sudamericana y la Recopa Sudamericana siempre que recibieran los pagos de sobornos anualmente a cambio de su lealtad.

Acepté continuar con estos pagos hasta 2015. Y también acepté pagar e hice pagar sobornos a otros funcionarios de C. en relación con estos T..

T. y yo tuvimos ganancias de estos pagos, de manera directa e indirecta, al asegurar estos derechos con una empresa de la que T. era accionista. Esa empresa pudo comercializar y T. pudo producir de manera exitosa los T. contemplados por estos derechos.

Para dar otro ejemplo, en 2011 y 2012 o alrededor de esa fecha, yo, en nombre de T., me junté con miembros de otras dos empresas de M.D. para formar una unión transitoria de empresas. En 2013, a la empresa recientemente formada se le adjudicó el contrato con C. para las ediciones 2015, 2019 y 2023 del torneo de la C.A.. Para asegurar el contrato, acordé con los ejecutivos de las otras dos empresas pagar múltiples sobornos por un total de decenas de millones de dólares a funcionarios de C. y FIFA a cambio de su respaldo para el nuevo contrato.

Sabía que se iba a jugar una edición especial de la C.A. en Estados Unidos en 2016. Esa edición fue organizada conjuntamente por C. y CONCACAF. Los funcionarios que tenían puestos de autoridad y confianza dentro de C. y CONCACAF se acercaron a nuestra unión transitoria de empresas y exigieron que nosotros y miembros de nuestras empresas pagaran un soborno en relación con los derechos de esta edición especial del torneo.

En última instancia, decidí no pagar un soborno a los funcionarios de C. y CONCACAF en relación con el torneo de 2016 por miedo a un control de ley...

Con respecto a toda la conducta, sabía que el sistema bancario de Estados Unidos estaría involucrado en la transferencia de pagos en relación con los contratos asegurados a través de sobornos y a través de la explotación de los derechos comerciales a los T.. Sabía también que se usarían los sistemas bancarios de Estados Unidos para promover los derechos que fueron asegurados a través de los sobornos que describí hoy y los esquemas subyacentes, también. También sabía que era altamente probable que el sistema bancario de Estados Unidos sea utilizado para facilitar los pagos de sobornos, especialmente porque las transacciones involucradas eran, a menudo, denominadas en dólares estadounidenses.

Además, viajé a Estados Unidos en varias ocasiones para avanzar en los esquemas mencionados en los Cargos 1, 39 y 40, incluso viajes a Nueva York y Miami...” (confr. la traducción al español obrante a fs. 1427 /1443 de los autos principales).

25º) Que, asimismo, la maniobra supuestamente utilizada para la ocultación de los pagos de sobornos clandestinos y de las ganancias marginales obtenidas por T.YC. S.A. en el período comprendido entre el año 2012 y 2016, así como las sociedades involucradas para ese fin, también surgiría del Acuerdo de Acusación Diferida celebrado por el representante de aquella sociedad el 13/12/2016 con la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

En efecto, mediante el acuerdo mencionado, se estableció: “...T. admite, acepta y reconoce que es responsable de los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes según se acusa en la información y en la Declaración de hechos. T. reconoce que como resultado de la conducta de algunas personas empleadas por la Empresa durante el período de tiempo alegado en la información, la Empresa se involucró y es penalmente culpable de incumplimiento del Capítulo 18 del Código de Estados Unidos, artículo 1349. T. estipula que todos los hechos alegados en la información y todos los que se describen en la Declaración de hechos son verdaderos y precisos...”.

Por su parte, por el Anexo B del acuerdo mencionado, se estableció: “...Declaración de hechos. La siguiente Declaración de hechos se incorpora por referencia como parte del acuerdo de acusación diferida (el ‘Acuerdo’) entre la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (la ‘Fiscalía’) y el demandado T.YC. S.A. (‘T.’ o la ‘Empresa’). Por la presente T. acuerda y estipula que la información siguiente es verdadera y precisa.... T. admite, acepta y reconoce que es responsable de los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes según se establece en el presente...”.

Por el párrafo 13 del acuerdo se estableció:

Fecha de firma: 16/08/2023

Alta en sistema: 17/08/2023

Firmado por: GUILLERMO RICARDO VILLELLA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA



#36037245#379615977#20230816120724898

“...EL DEMANDADO:

13. T. era una empresa de marketing y medios deportivos con sede en Argentina con una cantidad de subsidiarias y filiales, que incluye, entre otras, T&T Sports Marketing Ltd., con domicilio en las Islas Caimán, TyC I. B.V., con domicilio en los Países Bajos y la P. de E. S.A., con domicilio en Uruguay. Además, A.B., el Ejecutivo N° 1, el Ejecutivo N° 2, el Ejecutivo N° 3 de T. (quienes son definidos a continuación) y otras personas crearon y/o controlaron empresas ficticias por fuera de los libros de T., incluso FTP Sports SA y Arco Business and Developments Ltd., entre otras (en forma conjunta, las ‘Empresas fuera de los libros’) para realizar determinadas operaciones con T. o en nombre de esta, incluso según se describe en los párrafos 34 a 42...”.

Y, por los párrafos 34 a 44 del mismo, se estableció:

“...34. Entre 2010 y 2013, la subsidiaria que es propiedad total de T., TyC I. B.V. obtuvo los derechos para transmitir las ediciones 2018, 2022, 2026 y 2030 de la Copa Mundial al público de Argentina, Uruguay y Paraguay a través de una serie de Empresas fuera de los Libros y la Filial de la Empresa de Transmisión A que había garantizado los derechos a transmitir los T. en estos y otros territorios directamente de FIFA. T., a través de A.B. y otros, y a veces con la ayuda de uno o más representantes de la Filial de la Empresa de Transmisión A, incluso el Ejecutivo N° 1 de la Empresa de Transmisión, acordaron pagar y pagaron millones de dólares como sobornos y coimas al Funcionario del Fútbol N° 1, un funcionario de alto rango de la FIFA que tuvo una enorme influencia dentro de la asociación, para garantizar su apoyo a la adquisición de derechos de la Filial de la Empresa de Transmisión A para transmitir las ediciones 2018, 2022, 2026 y 2030 de la Copa Mundial en ciertos territorios y la posterior compra y explotación de algunos de esos derechos por TyC I. B.V...”

36. Alrededor de 1999 y hasta mayo de 2015, T&T Sports Marketing Ltd (‘T&T’), una filial de T., adquirió los derechos exclusivos mundiales de transmisión para cada edición de la Copa Libertadores... a través de una serie de contratos entre T&T y C.. T&T adquirió los derechos de dos T. menos importantes, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, también a través de una serie de contratos entre T&T y C.. T &T era propiedad parcial de T. y de socios en el riesgo, incluso por un período breve de tiempo, T. y luego un grupo de inversores que incluían la Filial B de la Empresa de Transmisión...

38. T., a través de A.B. y otros, en algunas oportunidades confiaron en el Ejecutivo de M.D. N° 1, Ejecutivo de M.D. N° 2, la Empresa de M.D. A y las Empresas fuera de los Libros para facilitar el pago de coimas y sobornos a ciertos de los funcionarios del futbol...



39. Alrededor de mayo de 2013, la P. de E. S.A., subsidiaria de T., T. y la Empresa de M.D. A crearon D., una nueva empresa en la que cada entidad tenía un tercio. D. luego celebró un contrato por 317,5 millones de dólares para obtener los derechos exclusivos mundiales a las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la C.A. y la C.A.C. 2016...

41. En relación con la adquisición de los derechos de medios a la C.A. y la C.A.C., T., a través de A.B. y los socios de T. en D. acordaron pagar e hicieron pagar decenas de millones de dólares en coimas a varios funcionarios del fútbol... Los socios de D. acordaron hacer estos pagos en varias oportunidades durante el plazo de los contratos.

42. La subsidiaria de T., P. de E. S.A. y los socios de D. dependieron de las Empresas fuera de los Libros, J.M. y los intermediarios de M., entre otros, para facilitar el pago de los sobornos y coimas a funcionarios de C. desde y a través de cuentas controladas por los accionistas de D. en relación con la C.A. y la C.A.C....

44. T. y sus co-conspiradores participaron de conductas diseñadas para evitar la detección de sus actividades ilegales, para ocultar la ubicación y propiedad del producido de esas actividades y promover que se continúen dichas actividades. La conducta en la que participaron varios miembros de la conspiración incluía, entre otras cosas: el uso de contratos de 'servicios de consultoría', facturas ficticias e instrucciones de pago y otros tipos de registros similares para crear una apariencia de legitimidad para pagos ilícitos, el uso de varios mecanismos, incluso intermediarios fiduciarios (entre ellos, los intermediarios de M.), banqueros (incluso Banquero N° 1 y Banquero N° 2) y traficantes de dinero para realizar y facilitar la realización de pagos ilícitos; la creación y uso de empresas fantasmas y el uso del dinero..." (confr. la traducción al español obrante a fs. 2227/2245 y 2272/2296 de los autos principales).

26º) Que, por la resolución apelada se estableció que "...vi) A. M. P. : firmó como apoderado de TYC I. B.V. el contrato de licencia por los derechos de transmisión de la C.A. 2015 y Sudamericano Sub 20 2013 con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina el 27/12/2012; firmó documentación del banco CITIBANK vinculada a operaciones de cambio realizadas por T.YC. S.A.; y desempeñó los siguientes roles: Director de D. S.A.; Presidente de MUSEOS DE PRIMERA S.A., TyC MINOR S.A., REVISTAS DEPORTIVAS S.A.; Vicepresidente de HD SERVICES S.A.; Director de COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A. y SOUTH AMERICAN SPORTS S.A.; Apoderado fiscal de T.YC. S.A.; Director suplente de T.YC. S.A. (2014); Apoderado de TYC I. B.V...." (confr. el considerando 24 de la resolución recurrida).



27º) Que, por otro lado, si bien H.V.J. y M.A.J. no habrían ocupado cargos directivos en T.YC. S.A. en el transcurso de los períodos examinados, los nombrados habrían tenido una relación directa con las ganancias que habrían sido ocultadas al fisco por parte de la contribuyente mencionada y podrían haber colaborado con el mecanismo supuestamente empleado para aquella ocultación mediante la utilización de D. S.A.

En este sentido, por la resolución apelada se estableció que “...i) H.V.J.: manejaba la cuenta corriente N° 1813536 de F.P. GROUP S.A. (accionista de D. S.A.) en Uruguay; y desempeñó los siguientes roles: Director Titular de D. S.A.; Presidente de F.P. INTERNATINAL TELEVISION S.A.; Directivo de FUTBOLESP S.A., F.P. S.A., CALCIO ONE S.A.; Accionista de F.P. ARGENTINA (50%) y Accionista de F.P. GROUP S.A....”, y que “...ii) M.A.J.: manejaba la cuenta corriente N° 1813536 de F.P. GROUP S.A. (accionista de D. S.A.) en Uruguay; firmó junto a B. el contrato con la C.; y desempeñó los siguientes roles: Presidente de D. S.A.; Vicepresidente de F.P. I. TELEVISION S.A.; Accionista de F.P. GROUP S.A.; y Accionista de F.P. ARGENTINA (50%)...”.

28º) Que, asimismo, teniendo en cuenta la complejidad de la maniobra supuestamente urdida por A.B. para la obtención de las ganancias relacionadas con el período fiscal 2015 y la ocultación de las mismas al fisco nacional, mediante la utilización de las sociedades mencionadas por el considerando 23º de la presente (confr. la resolución administrativa de deuda tributaria de A.B., cuya copia obra a fs. 3608/3627 de los autos principales, parcialmente transcripta por el considerando 10º de la presente), y la intervención que habrían tenido J. M. R. y L. M. EE. en las sociedades presuntamente utilizadas para la implementación de aquel mecanismo, no se verifica el estado de certeza negativo al que se hizo alusión por el considerando 21º de la presente respecto de los nombrados con relación al hecho por el cual se dictó el auto de sobreseimiento de aquéllos.

En efecto, por la resolución apelada se destacó que “...iv) L.M.E.: firmó como apoderado de TYC I. B.V. una propuesta de acuerdo y el posterior acuerdo complementario al contrato de licencia del mundial 2014 con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina el 15/5/2014; y desempeñó los siguientes roles: Director de D. S.A. (2012/2014); Director Titular de REVISTAS DEPORTIVAS S.A. y TyC MINOR S.A.; Vicepresidente de SOUTH AMERICAN SPORTS S.A. y COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.; Apoderado fiscal de HD SERVICES S.A. y de T.YC. S.A.; Director suplente de T.YC. S.A. (2013/2014); y Apoderado de TYC I. B.V....”, y que “...v) J. M. R. : firmó como apoderado de TYC I. B.V. el

contrato de licencia por los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol 2014 con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina el 27/12/2012; en abril de 2014 firmó como apoderado de TYC I. B.V. un presupuesto vinculado a la venta al estado del equipamiento necesario para la transmisiones de eventos deportivos; firmante de la cuenta que T.YC. S.A. tiene en el banco ICBC; y firmó documentación del banco CITIBANK vinculada a operaciones de cambio realizadas por T.YC. S.A.; y desempeñó los siguientes roles: Director de D. S.A. (2012/2014); Presidente de HD SERVICES S.A., COMPAÑÍA DE MARCAS Y EMPRENDIMIENTOS S.A. Y SOUTH AMERICAN SPORTS S.A.; Vicepresidente de REVISTAS DEPORTIVAS S.A.; Apoderado fiscal de T.YC. S.A.; Director suplente de TONEOS Y COMPETENCIAS S.A. (2013 y 2014); y Apoderado de TYC I. B.V....” (confr. el considerando 24 de la resolución apelada).

Por consiguiente, los autos de sobreseimiento dispuestos por los puntos dispositivos II y III de la resolución de fecha 17/11/2021 no se ajustan a derecho y a las constancias actualmente incorporadas a la causa, por lo que corresponde su revocación.

29º) Que, por otro lado, a criterio de este Tribunal tampoco se ha alcanzado el estado de certeza sobre la existencia de alguno de los supuestos previstos por el art. 336 del C.P.P.N. al que se hizo alusión por el considerando **21º** de la presente, respecto de A.B., de M.A.J., de H.V.J., de L.M.E., de J. M. R. , y de A. M. P. , con relación al hecho supuesto consistente en haber formado parte de una asociación compuesta por tres o más personas que, al menos durante los años 2010 a 2016, habría estado destinada a cometer indeterminados delitos tributarios previstos en la ley 24.769, por lo que el auto de sobreseimiento dispuesto por el punto dispositivo IV de la resolución recurrida, tampoco se ajusta a derecho y a las constancias de la causa.

30º) Que, en efecto, sin perjuicio del criterio que pudiera tenerse sobre el tipo penal previsto por el art. 15, inciso “c” de la ley 24.769 (confr. los votos del señor Juez de cámara Dr. Roberto Enrique HORNOS en los pronunciamientos de los Registros N° CPE 1321/2017/10/CA3, res. del 08/10/2018, Reg. Interno N° 841/18 y CPE 528/2008/12/CA3, res. del 28/10/2019, Reg. Interno N° 855/2019, de esta Sala ‘B’), por el momento no pueden descartarse, sin más, la concurrencia en el caso de los requisitos previstos por la norma mencionada o los requeridos por el art. 210 del Código Penal.

En este sentido, se advierte que, en principio, se encontrarían presentes los requisitos de la cantidad de personas, de la permanencia en el tiempo y de la actuación de los imputados de modo organizado, que surgen de haber integrado los mismos sociedades pertenecientes a un mismo grupo



económico, y haber ejecutado actos en representación de aquellas sociedades en el período involucrado (confr. los considerandos 23° a 28° de la presente), en cambio, por el momento, no puede descartarse de manera cierta e incuestionable la existencia de un acuerdo o pacto entre los imputados con la finalidad requerida por aquellas normas.

31°) Que, por otro lado, si bien por la resolución recurrida se hace referencia a que algunos de los delitos imputados por el señor representante del Ministerio Público Fiscal se tratarían de “...delitos comunes los cuales han sido investigados en Estados Unidos de Norteamérica y en el marco de la causa N° CFP 7888/2015 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3...”, lo cierto es que por la resolución recurrida no se efectuó un análisis específico y preciso sobre la concurrencia de los requisitos para la aplicación al caso de manera inequívoca del principio que impide la persecución penal múltiple por un mismo hecho.

32°) Que, en efecto, conforme se ha establecido por pronunciamientos anteriores de este Tribunal, para determinar si existe persecución penal múltiple se requiere la conjunción de tres identidades: identidad de la persona perseguida (*eadem persona*), identidad del objeto de persecución (*eadem res*) e identidad en la causa de persecución penal (*eadem causa petendi*) (confr. Regs. N° 21/00, 170/00, 800/00, 371/06, 250/13, CPE 1407/2013/17/CA2, res. del 27/05/2015, Reg. Interno N° 202/15, y CPE 1727/2016/6/CA1, res. del 23/03/2018, Reg. Interno N° 144/18 de esta Sala “B”; entre otros).

33°) Que, el principio “*ne bis in idem*”, reconocido explícitamente por el art. 14 apartado 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el art. 8 apartado 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), con jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el art. 75 inc. 22, de la Constitución Nacional, es una garantía personal que sólo impide el doble juzgamiento **de una misma persona por un mismo hecho**, pero que de ninguna manera impide la imputación de aquel hecho a otras personas que no fueron juzgadas en el proceso anterior.

“La identidad de la persona perseguida penalmente en varios procesos es, pues, una condición esencial para el efecto negativo del principio, es decir, para evitar una persecución nueva, cuando la anterior ya ha terminado o se inicia otra a un mismo tiempo...”

La garantía no se extiende a otra persona, que no ha sido perseguida penalmente, cualquiera que sea la solución del caso. Por ello, la condena, la absolución o el sobreseimiento de un imputado no amparan a

otro, aunque el fundamento sobre la base del cual se arribó a una solución determinada sea común (por ejemplo la falta de comprobación del hecho imputado o de la adecuación típica del verificado) o se trate de un caso de participación criminal conjunta... Ello indica que, como garantía personal, el principio rige individualmente y no posee efecto extensivo; ello porque la garantía torna inviable una persecución penal ya ejercida, concluida o en ejercicio, evitando los intentos repetidos para condenar a un mismo individuo, pero carece de eficacia para transformar en lícito lo que es antijurídico y punible...

...los tribunales no tienen por misión, en nuestro sistema, decidir erga omnes, si algo existe o no ha sucedido, o si lo que sucedió constituye un delito o, por el contrario, carece de esos atributos, todo como si se tratara de un hecho de la naturaleza que ha ocurrido en el mundo; ello implicaría también, en sentido diverso al común, resolver abstractamente. Los tribunales deciden sobre comportamientos humanos imputables a personas y, en el caso del Derecho penal, generalmente, sólo imputables a personas físicas determinadas...” (confr. Julio B. J. MAIER, “Derecho Procesal Penal”, Tomo I Fundamentos, Editores del Puerto, 2º edición, 3º reimpresión, Buenos Aires, 2004, págs. 604/606).

34º) Que, tampoco se ha establecido la existencia del requisito de la identidad del objeto de persecución (*eadem res*), pues “...para que la regla funcione y produzca su efecto impidiendo característico **la imputación tiene que ser idéntica, y la imputación es idéntica cuando tiene por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona** (identidad de objeto = *eadem res*)...**Dos objetos procesales son idénticos**, y no permiten persecuciones penales distintas simultáneas o sucesivas, **cuando la imputación consiste en la misma acción u omisión concreta** aun cuando sólo afirmadas hipotéticamente como ciertas.” (confr. Julio B. J. MAIER, ob. cit., págs. 606/608; el resaltado no corresponde al texto original).

35º) Que, por consiguiente, también corresponde revocar lo dispuesto por el punto dispositivo IV de la resolución recurrida.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. DECLARAR ERRÓNEAMENTE CONCEDIDOS los recursos de apelación interpuestos contra el punto dispositivo I de la resolución de fecha 17/11/2021.

II. REVOCAR los puntos dispositivos II, III y IV de la resolución apelada.

~~III. SIN COSTAS~~ (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Fecha de firma: 16/08/2023

Alta en sistema: 17/08/2023

Firmado por: GUILLERMO RICARDO VILLELLA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA



#36037245#379615977#20230816120724898

Poder Judicial de la Nación

Regístrese, notifíquese oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de Superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, y devuélvase junto con los autos principales y la documentación.

La Dra. Carolina L. I. ROBIGLIO no firma por haberse aceptado la inhibición formulada por la señora juez de cámara mencionada para intervenir en autos (confr. fs. el auto de fecha 2/12/2021 de este incidente y el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

